EL (POTENCIAL) ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS Y LA POBREZA. ESPECIAL CONSIDERACIÓN A LA LABOR DEL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS[1]

Rodrigo Merayo Fernández[2]

1. INTRODUCCIÓN

La pobreza continúa siendo un problema relevante a nivel internacional. No es casualidad que la erradicación de la pobreza en todas sus formas y manifestaciones sea el primero de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. La consideración de que la pobreza es un mal a erradicar da pistas acerca del tipo de cuestión que vamos a afrontar, esto es, la pobreza tiene que ver más con una situación social creada o permitida que con una condición humana, aunque esta, sin lugar a duda, determina la identidad del sujeto.

Ahora bien, la cuestión de la pobreza es un tema complejo y espinoso en lo que respecta tanto a la conceptualización del término como

[1] Este trabajo se enmarca en el proyecto de «Teorías de la Justicia y Derecho Global de los Derechos Humanos [JUSGLOBAL]», dirigido por las profesoras María Isabel Wences Simón y Carmen Pérez González, y financiado por la Agencia Estatal de Investigación, número de expediente PID2019 107172RB–I00/AEI /10.13039/501100011033 del Grupo de Investigación sobre el Derecho y la Justicia de la Universidad Carlos III de Madrid.

[2] Quiero agradecer las anotaciones y los comentarios a los asistentes al «Seminario de Investigadores en Formación sobre los Derechos Fundamentales de la Unión Europea», organizado por la cátedra Jean Monnet Integration through EU Fundamental Rights, celebrado el 2 de junio de 2023 en la UNED, especialmente al profesor Xabier Arzoz Santisteban y a la profesora Itziar Gómez Fernández.

a la identificación de aquellos que van a ser considerados como «los pobres». La idea o noción de pobreza que escojamos, así como la estrategia de identificación (método de medición), resultarán determinantes en la actuación de las instituciones (políticas, económicas y sociales), y en los fines a perseguir. Igualmente, conviene apuntar que, dentro de la literatura especializada en el tema, se diferencia entre «extrema pobreza», «pobreza» y «exclusión social». Esta considerable distinción, no solamente alerta de los distintos grados de privación o carencia en los que se ven envueltos las personas, sino que también orienta (o debería de) las distintas evaluaciones y estrategias de actuación para afrontar adecuadamente este tipo de situaciones.

Algunos recientes datos sobre los niveles de pobreza brindan un marco legítimo y justificado de estudio de esta cuestión para superar las posibles divergencias (aunque existe una clara función ideológica también en este asunto), unificando en la preocupación compartida por intentar poner fin a este tipo de situaciones tan sangrantes e injustas. En este sentido, por poner algunos antecedentes encima de la mesa, los últimos datos del Banco Mundial (2022) reflejan que alrededor de unos 719 millones de personas viven en una situación de pobreza extrema, es decir, con menos de 2,15$ al día. De forma similar, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2023), estima que alrededor de 1 100 millones de personas se encuentran todavía en situación de pobreza.

A nivel europeo, Eurostat hizo público los datos sobre las condiciones de vida en Europa en relación con la pobreza y la exclusión social, donde destacó que alrededor del 21,6 por 100 de la población en la Unión Europea se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social. Así las cosas, sin lugar a dudas, esta labor tiene su razón de ser».

Este capítulo, que toma dicho testigo, abordará la cuestión de la pobreza en el ámbito europeo, pero desde un punto de vista jurídico. Lo que se pretende es una aproximación al funcionamiento del sistema europeo de derechos humanos, concretamente a través de la labor jurisprudencial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelante TEDH o el Tribunal), que es el órgano encargado de velar por la garantía y protección de los derechos humanos en el espacio del Consejo de Europa.

La importancia de esta tarea radica en el reciente auge de la praxis jurídica como doctrina de estudio, sobre todo a través del enfoque de derechos humanos, de algunas problemáticas sociales, entre las que se encuentra la pobreza[3]. Esto permitirá conocer las potencialidades y los límites de su tarea y, por ende, de la normativa europea al efecto.

[3] Algunas interesantes aportaciones acerca de este asunto pueden verse en Álvarez Vélez y Rey Pérez (2015); Bilchitz (2017); Talavera Fernández (2019, 2020); Verdiales López (2019); Fernández Blanco y Pereira Fredes (2021).

Igualmente, el estudio de los casos contenciosos posibilitará conocer el tipo de situaciones que el TEDH toma en consideración como merecedoras de análisis, lo que, a su vez, dará cuenta de la idea o noción de pobreza presente en el Tribunal.

El sistema europeo de protección de los derechos humanos responde a la clásica (y cuestionada) clasificación generacional de los derechos humanos. A esta visión se le ha apodado como «funcionalista» por basarse en la creencia de que primero ha de alcanzarse la democracia de corte civil y política y, posteriormente, la democracia de corte social. La pobreza, en mayor o menor medida, afecta y desgasta a ambos modelos democráticos, sin lugar a duda. El sistema europeo asume una lógica «policentrista», consistente en valorar que existen ciertas cuestiones vinculadas estrictamente a la función política, donde poco o nada tienen que decir organismos externos (por ejemplo, en lo que respecta a la distribución de recursos). Este rasgo, como señala Lavrysen (2015: 306), opera, también, en la jurisprudencia del Tribunal, especialmente a través del criterio del «margen de apreciación».

En definitiva, este trabajo pretende dar cuenta de la fuerte conexión existente entre las situaciones de pobreza y la privación del goce y ejercicio de los derechos humanos a través del estudio de la jurisprudencia del Tribunal.

Debido a ello, en primer lugar, se propone un breve acercamiento a las concepciones contemporáneas de la pobreza más relevantes con el objetivo de mostrar el paisaje conceptual en el que se imbrica el debate sobre la pobreza y que, como no podría ser de otra manera, repercute sobre el ejercicio jurídico. En este punto, el ámbito de estudio se focaliza sobre el criterio multidimensional.

En segundo lugar, se llevará a cabo un estudio introductorio sobre el funcionamiento del sistema regional europeo de derechos humanos y los principales instrumentos con los que cuenta, así como se esbozarán algunos argumentos a favor del uso del enfoque de derechos humanos como modelo para tratar, afrontar y revertir la pobreza.

En tercer lugar, se realizará un estudio pormenorizado de la jurisprudencia del TEDH más destacada en lo que respecta a la pobreza.

Por último, se acabará con unas conclusiones críticas acerca de este estudio y con algunos comentarios complementarios.

2. BREVE ACERCAMIENTO CONCEPTUAL A LA POBREZA CONTEMPORÁNEA

Los intentos por comprender y definir la pobreza a lo largo de la historia han sido numerosos y variados, pero, todos ellos, a excepción

de la pobreza de espíritu, han concordado en su negatividad para la vida de las personas. No es este el lugar para llevar a cabo un estudio histórico–conceptual del término, por lo que, con el objetivo de facilitar la comprensión al lector, me centraré solamente en el criterio sobre el que se organizan la mayoría de los estudios contemporáneos en materia de pobreza y que goza de mayor popularidad.

Frente a la visión unilateral de la pobreza como una simple cuestión de ingreso o de consumo (criterio económico), en la década de los años sesenta y setenta del siglo pasado vieron la luz las primeras aportaciones que acabarían dando forma al criterio «multidimensional» de la pobreza. Cuestionando el criterio economicista, surgió el enfoque de las necesidades como un arquetipo complementario y, en cierto sentido, opuesto, lo que prendió la mecha de un fructífero recorrido hacia aportaciones teóricas más complejas, pero mucho más enriquecidas y pragmáticas.

La teoría de las necesidades ha sido, a mi modo de ver, la extensión de algo inevitable. Esta asume, como no podría ser de otra manera, que la renta y el ingreso son algunas de las áreas (destacables) que influyen sobre las situaciones de pobreza, pero considera que no son las únicas ni, tal vez, (siempre) las más importantes. Los primeros estudios sobre las necesidades vieron la luz en su versión más mínima, ligados con la simple supervivencia o la seguridad humana (más) básica (alimento, alojamiento, higiene personal…). Con el paso del tiempo, la perspectiva de las necesidades comenzó a integrar otras áreas igualmente necesarias como la salud, la educación, el empleo, la cultura, así como algunos otros bienes y servicios básicos.

Así las cosas, la teoría de las necesidades, que cuenta con distintas versiones, ha tenido una considerable repercusión en el mundo jurídico, concretamente en el campo de los derechos humanos y, especialmente, respecto de los derechos económicos, sociales y culturales[4]. Pero, para comprender adecuadamente este apartado, hay que examinar las perspectivas absoluta y relativa de la pobreza que influyen sobre las distintas nociones contemporáneas de pobreza y dan sentido al criterio multidimensional.

La tesis relativa o «relativista» comprende la pobreza como aquella situación en la que no se tiene lo que se considera necesario para desarrollar el estilo de vida de la sociedad en la que uno se encuentra o, lo que es lo mismo, los pobres se diferencian del «grupo de referencia» (resto de la población) porque no cuentan con o no son capaces de satisfacer aquello que sí tienen o sí son capaces de satisfacer los demás.

[4] Sobre esta la relación entre los derechos sociales, económicos y culturales con la teoría de las necesidades, algunas interesantes aportaciones se encuentran, entre otros, en De Lucas y Añón Roig (1990), Nino (1990), Contreras Peláez (1994: 52–108), Ribotta (2008), Abramovich y Courtis (2014), y Boyle (2018; 2020).

Habitualmente, con cierta coherencia, a la visión relativa se le recrimina disolver la pobreza en las aguas de la desigualdad al considerar, en esencia, que esta implica tener menos que el resto, lo que explica que Townsend (1979; 2003), principal figura de esta corriente, defendiese que las necesidades humanas varían y están determinadas socialmente (Boltvinik, 1990: 29–30; Spicker, 2013: 38).

Respecto de la tesis absoluta, encabezada por Amartya Sen, el cual define la pobreza como la privación de las capacidades básicas (es una formulación teórica alternativa–complementaria de las necesidades), critica las interpretaciones que inciden en la posesión de los «medios» (satisfactores, bienes y recursos) como estrategia para aliviar la necesidad. En este sentido, Sen estima necesario distinguir entre pobreza y desigualdad pues la primera siempre acarrea un grado de privación absoluta de algunas capacidades (básicas) que son, según él, un núcleo universal irreductible difícil de cuestionar[5].

Igualmente, acusa a la tesis «relativista» de no distinguir adecuadamente entre el espacio de las capacidades (o necesidades) y el de los satisfactores o los bienes y recursos materiales (Sen, 1985). Él mismo enfatiza que los «medios» para alcanzar las capacidades (o satisfacer las necesidades) sí que deben venir determinados por cada contexto particular en el que se encuentren las personas (afectadas), pero no así las capacidades básicas, ya que estas gozan de una presunción de universalidad en las que poco o nada influyen estos diferentes contextos. Pese a ello, finalmente, su postura acaba vacilando en un punto intermedio entre lo absoluto y lo relativo, en el que se mezcla la consideración absolutista–universalista de las capacidades básicas con el criterio relativista, donde apuesta por procedimientos democráticos deliberativos en los que cada sociedad debería escoger qué capacidades quiere incluir en su catálogo[6].

A fin de cuentas, lo que importa retener para este trabajo es que ambas perspectivas se sitúan en el ámbito multidimensional de la pobreza debido a que seleccionan una variedad de áreas de evaluación de esta más allá de la estrictamente económica. Igualmente, bajo este sentido multidimensional, se articulan las principales nociones contemporáneas de pobreza bajo el lenguaje de las necesidades, de las capacidades y de

[5] Pese a que Sen hace referencia expresa a lo largo de su obra a algunas de estas capacidades básicas, nunca ha llegado a elaborar una lista directa y completa de estas. Nussbaum ha completado este vacío.

[6] Una visión crítica sobre estas corrientes ha sido desarrollada por Moyn (2019). Este autor critica la imposición del modelo de la suficiencia (necesidades básicas) frente al proyecto igualitarista poscolonial y su relación con los derechos humanos. Pese a ello, no renuncia a la consideración de la suficiencia, sino que la aborda como un complemento más en favor de un modelo igualitario. En esta labor no se hace caso omiso de esta advertencia, por lo que se propondrá un «mínimo garante» que intente no asumir la lógica de un «suficientarianismo desconectado».

los derechos humanos. La extrema pobreza se ha tendido a identificar con la perspectiva absoluta, mientras que la pobreza general o moderada lo ha hecho con respecto al criterio relativo. La labor del TEDH se encuadra en ese espacio intermedio entre ambos criterios, aunque, eso sí, con una fuerte tendencia al abordaje de casos conexos con el criterio absoluto e interpretados en clave de necesidades humanas básicas a través de la técnica jurídica.

3. EL ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS EN LA LUCHA CONTRA LA POBREZA. ARGUMENTOS PARA SU DEFENSA

Un examen detallado de la evolución jurisprudencial del TEDH permitirá comprobar cómo opera el contenido del Convenio a través de la interpretación del Tribunal en asuntos vinculados con la pobreza. Pero, por el momento, surge una importante cuestión que debe ser respondida: ¿Cuál es la razón que motiva el análisis de la pobreza desde un enfoque de derechos humanos y no desde otras disciplinas o partiendo desde otras disciplinas? O, lo que es lo mismo, ¿qué aspectos contiene el enfoque de derechos humanos que le otorgan la importancia que se le pretende atribuir?

El «enfoque de derechos humanos» representa un tipo específico de paradigma consistente en afrontar las realidades sociales desde una óptica donde los derechos humanos sean el eje nodal sobre el que analizar, razonar, inspirar y coordinar la acción para intentar dar una adecuada respuesta a las mismas, tanto desde el plano de las estrategias de desarrollo como aquellas de salvaguarda y garantía jurídica de los derechos. Este enfoque varía conforme a los distintos contextos y particularidades, por lo que, más que hablar de un «enfoque de derechos humanos», deberíamos de referirnos, en plural, a los «diferentes enfoques de derechos humanos». Pese a ello, existe un núcleo de preocupación compartido por el respeto, la garantía y la promoción de los derechos humanos, y es en eso en lo que interesa centrarse a la hora de argumentar a favor de su uso en singular.

Cabe recordar que el objetivo inicial que inspiró la construcción del sistema europeo (e internacional) estuvo ligado al control del poder político y a la consagración de una serie de derechos humanos centrales, lo que encuentra su razón de ser, en buena parte, en los hechos históricos que desencadenaron la Segunda Guerra Mundial[7]. En un

[7] En el caso europeo los derechos humanos centrales que se decidieron salvaguardar de manera urgente fueron los de carácter civil y político, haciendo caso omiso de los derechos económicos, sociales y culturales. Esta ausencia difiere con el espíritu del contenido de la Declaración Universal de Derechos Humanos (en adelante DUDH), la cual incorpora ambos tipos de derechos.

sentido más contemporáneo, podría definirse a los derechos humanos como «titulaciones fundamentales» que exigen y fortalecen la consideración igualitaria de todas las personas debido a su dignidad humana (Nussbaum, 2005).

Los derechos humanos contemporáneos, por tanto, se erigen sobre el principio y valor de la dignidad humana, la cual se ve acompañada de otros principios y valores igualmente importantes, tales como la libertad, la igualdad o la seguridad. Los derechos humanos, entonces, podría decirse, ostentan la función de salvaguarda y promoción de los atributos vinculados con la dignidad humana, de ahí su carácter de inalienables, inherentes, esenciales e intransferibles. En la práctica, esto se traduce en la obligación de las sociedades y la comunidad internacional de (intentar) desplegar todos los esfuerzos necesarios y adoptar las medidas adecuadas para garantizar el igual respeto y consideración de sus miembros y de las personas, en general. Hemos topado con la primera y más elemental razón que avala el uso del enfoque de derechos humanos, que no es otra que la consideración de la dignidad humana.

Aun así, esta idea no es ni ha sido una cuestión pacífica y del todo clara. En el ámbito legal, Habermas (2010: 5) ha destacado que esta no apareció recogida en los textos de derechos humanos hasta la normativa internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial, aunque sí estaba implícita en los textos previos. Desde un punto de vista filosófico, la génesis moderna de la idea de dignidad humana radica en la obra del filósofo Immanuel Kant y, especialmente, en su noción del imperativo categórico (Kant, 2005).

Esta formulación filosófica ha sido el basamento que ha inspirado la normativa internacional de derechos humanos contemporánea, aunque, como señala Delgado Rojas (2020: 268–269), los diferentes sistemas de derechos humanos y derechos fundamentales la han ido ampliando y adoptando a sus específicos contextos[8]. En este sentido, para nuestros intereses, basta con recordar, junto a Habermas (2010: 11), que la noción de dignidad humana ejerce las funciones de puente conceptual entre lo moral y lo jurídico, y es ahí donde los derechos humanos resultan determinantes.

Una segunda ventaja que predispone este enfoque es que, debido a la posibilidad de alcanzar consensos que permite apelar a una noción como la de la dignidad humana, la idea de los derechos humanos goza de una considerable salud a nivel internacional. El discurso de los

[8] Una novedosa y reciente doctrina de estudio de los derechos humanos se ha embarcado en la labor de redefinir lo humano a través de la consideración del estatus de la naturaleza y de los animales. Esta corriente doctrinal cuestiona los presupuestos kantianos en lo que se refiere a la consideración y el tratamiento del valor de la naturaleza. Véase Montalván–Zambrano (2020; 2023).

derechos humanos ha conseguido asentarse como una lógica bastante aceptada internacionalmente gracias a la reivindicación de una serie de principios y valores con los que resulta difícil estar en desacuerdo. No es casualidad que la mayor parte de los movimientos sociales o reivindicaciones sociopolíticas no dejen de lado, se articulen o apelen al discurso de los derechos humanos.

Por ello, puede sostenerse que los derechos humanos ejercen (o deberían de ejercer), a su vez, como límite y guía para el procedimiento y la toma de decisiones en múltiples ámbitos, por lo que resulta lógico atribuirles el rango de verdaderas «cartas de triunfo» que configuran un terreno («coto vedado») en el que, una vez asegurados, el conflicto y la discusión política basado en los intereses o deseos de la comunidad, o de una parte de la misma, tienen o tendrían nula operatividad debido al carácter innegociable de tales derechos (Garzón Valdés, 1989; Bayón, 2000; Dworkin, 2012)[9].

La tercera ventaja que refuerza este enfoque es que presenta un marco y un funcionamiento sensible a la interdisciplinariedad, es decir, permite absorber y ponderar los diferentes intereses en juego en base a las consideraciones provenientes de diferentes ámbitos de conocimiento por medio de los derechos humanos. Y ello no es más que por el simple hecho de la importancia que tiene el derecho como regulador de la vida social y de las instituciones que a esta acompañan. Esta virtud es especialmente palpable, por ejemplo, a la hora de decidir las políticas públicas, las estrategias de desarrollo o en la actividad de los Tribunales (por ejemplo, medidas reparatorias)[10]. Ahora bien, este «equilibrio interdisciplinar» encuentra un límite a su actuación en los

---

[9] Este punto no ha estado exento de críticas, las cuales no pueden abordarse aquí en profundidad. A mi modo de ver, las más importantes son aquellas que inciden en el aspecto histórico–cultural, el tipo de sujeto titular de derechos (Grear, 2007), la concepción realista de los derechos vinculada, especialmente, con cuestiones bélicas y humanitarias (Rorty, 1998) y, más recientemente, la enormemente cuestionada relación entre vulnerabilidad–debilidad–colectivos (Fineman, 2008; 2013). Para un análisis contrario respecto de la primera y tercera crítica, algunos autores como Sen (1997), Habermas (2010) o Nussbaum (2012a:147) han desarrollado buenos argumentos. Para una posible vía de contraargumentar la crítica del tipo de sujeto planteado (hombre, varón, blanco, heterosexual, hábil…), puede acudirse al «proceso de especificación» de los derechos presente en Bobbio (1991). Con el argumento de Fineman estoy esencialmente de acuerdo.

[10] A su vez, el enfoque de derechos humanos permite (o permitiría) contar con la participación o la colaboración de las víctimas, los afectados, las organizaciones sociales o la sociedad civil en general en las decisiones, en la elaboración y aplicación de este tipo de políticas o las estrategias de desarrollo. Por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Corte IDH) ha incorporado para algunos casos en materia de pobreza medidas de reparación en las que las víctimas o los afectados juegan un papel protagónico junto a las autoridades estatales (véase, a modo de ejemplo, Corte IDH (2020). Empleados de la Fábrica de Fuegos en Santo Antônio de Jesus y sus familiares vs. Brasil. Sentencia de 15 de julio de 2020. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas).

derechos fundamentales y en el nivel umbral mínimo de garantía de cada derecho humano.

En cuarto y último lugar, el enfoque de derechos humanos contribuye (o debería de contribuir) a la garantía, exigibilidad, realización y aseguramiento de los funcionamientos–capacidades asociadas a aquellas áreas vitales elementales para el adecuado desarrollo humano. Las principales aportaciones doctrinales contemporáneas, tales como la teoría de las necesidades, el enfoque de las capacidades y la idea de los derechos[11], resultan de gran interés en este sentido, e inspiran la comprensión y el planteamiento del enfoque de derechos humanos desde la dimensión de la pobreza y la miseria. Las obligaciones internacionales de derechos humanos, al menos en un nivel mínimo acorde con la dignidad humana (respeto, garantía, protección y efectividad–calidad), confirman este extremo.

En esencia, estas son, a mi modo de ver, las principales ventajas con las que cuenta el enfoque de derechos humanos para ser un marco fértil, permeable y objetivamente importante para abordar las situaciones de pobreza[12].

4. EL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS Y LA POBREZA. APUNTES SOBRE LA PRAXIS JURISPRUDENCIAL

Pese a las limitaciones convencionales, el TEDH ha ido desarrollando una interesante doctrina jurisprudencial, especialmente desde *Airey contra Irlanda*, de 9 de octubre de 1979, en la que ha ido teniendo en cuenta distintas situaciones que han ampliado el contenido de algunos derechos convencionales. A mi modo de ver, esta extensión se asienta, principalmente, sobre tres ejes: la indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos, la visión del Convenio como un «instrumento

[11] La teoría de las necesidades cuenta con diferentes formulaciones al respecto, aunque considero especialmente relevantes aquellas que han ampliado el enfoque de la «subsistencia» incorporando dimensiones igualmente importantes para la pobreza (véase, entre otras, Doyal y Gough, 1994; Max–Neef, Elizalde y Hopenhayn, 2010; y Ribotta, 2011). El enfoque de las capacidades defiende que lo realmente importante es lo que las personas son realmente capaces de ser o hacer, y donde encontramos un conjunto de capacidades básicas (Sen, 2000; 2010 y 2021) o centrales (Nussbaum, 2005; 2007; 2012a y 2012b). Finalmente, la teoría de los derechos, en esencia, se caracteriza por la reivindicación de una serie de deberes que han de ser cumplidos para su adecuado y correcto funcionamiento, extremo que les diferencia de las simples demandas, las cuales tienen cierta relevancia moral y política, pero no imponen deberes (véase Dieterlen, 2003: 126–128).

[12] Buena parte de los argumentos que he utilizado para justificar el enfoque de derechos humanos no podrían haberse desarrollado sin el trabajo previo de algunos autores, entre los que destacan: Maurino (2007), Salmón (2007), Faur (2008), Pinto (2008; 2009), Urueña (2013), Von Bogdandy y Urueña (2020).

vivo» y la creencia de que los derechos humanos han de ser verdaderamente «reales y efectivos» y no meramente formales[13].

La convicción de que la normativa europea ha de ser interpretada en base a la realidad social de cada momento se ha convertido en un hecho notorio. En este sentido, este trabajo examina y avala la «protección indirecta» (Bonet Pérez, 2016) desarrollada por el Tribunal.

A través de esta sensibilidad contextual, el Tribunal ha desarrollado una labor interpretativa que amplía el contenido de algunos derechos convencionales a situaciones que, en principio, no quedarían cubiertas por la garantía de estos, debido precisamente a las dificultades que plantean las lógicas «funcionalista» y «policentrista». En este punto, hay que reconocer que el Tribunal se ha distanciado de estas lógicas con base en los ejes arriba reseñados.

Aun así, al menos en lo que respecta a la cuestión de la pobreza, conviene puntualizar que el TEDH no ha reconocido nunca un derecho económico o social en sentido estricto como parte del contenido de aquellos derechos convencionales, sino que, más bien, lo ha hecho con respecto al ámbito de interacción en el que conectan los derechos civiles y políticos con los derechos económicos y sociales, es decir, el de las garantías socioeconómicas.

Esta extensión de la protección a aspectos socioeconómicos se ha llevado a cabo a través de dos modalidades de interpretación fruto de la «permeabilidad» del Convenio: por un lado, el «principio de conexión» que «identifica la existencia de una relación «íntima e inescindible» entre el derecho o libertad reconocido en el CEDH o en sus Protocolos, y el DESC o el interés económico, social o cultural cuya protección jurídica es pretendida» (Bonet Pérez, 2016: 156). A su vez, este cuenta con una vertiente «explícita» y otra «implícita».

La vertiente «explícita» supone que el propio contenido del artículo convencional es el que clarifica el vínculo de interacción con el contenido de algún derecho socioeconómico que tenga especial repercusión para el cumplimiento convencional (derecho a un proceso equitativo, derecho a un recurso efectivo, prohibición de discriminación y prohibición general de discriminación).

La vertiente «implícita» se corresponde con una tarea estrictamente interpretativa del Tribunal por medio de la cual se estipula la conexión entre un derecho convencional y un derecho o garantía socioeconómica, sin que exista especificación alguna de dicho contenido o garantía en la disposición convencional (derecho a la vida, derecho a la protección contra tratos inhumanos o degradantes, derecho al respeto de la vida

[13] Lavrysen (2015: 294 y 308), López Guerra (2015; 2018: 116), Mestre i Mestre (2016: 123), Barcelona (2017: 333), Morte Gómez (2018: 552), Pribytkova (2019: 346–348).

privada y familiar); «el principio de incorporación», es tal que «integra, como parte del contenido jurídico del derecho o libertad reconocidos en el CEDH o en sus Protocolos, el contenido —o parte del mismo— de un DESC o de un interés económico, social o cultural debido a una operación racional que identifica la lógica agregativa de tal resultado» (Bonet Pérez, 2016: 156).

En lo que aquí respecta, el estudio de la jurisprudencia del Tribunal se centrará en los casos concernientes al «principio de conexión implícito» debido a que allí radican los contenciosos más importantes resueltos por el TEDH en materia de pobreza, especialmente a través de la lógica de las «obligaciones positivas». Los otros dos principios también acogen algunos asuntos, aunque no son tan determinantes y trascendentales como los que aquí se van a examinar.

4.1. El «principio de conexión implícito»: arts. 2, 3 y 8 CEDH

4.1.1. *Derecho a la vida (art. 2)*

Aunque no existe una copiosa jurisprudencia sobre situaciones de pobreza en las que el derecho a la vida se vea inmiscuido, sí es conveniente abordar aquellos contenciosos en los que esta ha sido un factor central. El inicio de la ampliación de la interpretación del derecho a la vida trae causa en la obra de Imbert (1989), autor que sostuvo, con base en la idea de la dignidad humana, la tesis de que la interpretación de los arts. 2 y 3 CEDH debería de trascender su literalidad para intentar abordar situaciones conexas con la justicia social como la pobreza.

En *Nencheva y otros c. Bulgaria*, 18 de junio de 2013, encontramos el caso más flagrante de la pobreza como un verdadero daño que atenta contra el derecho a la vida. Los reclamantes fueron los padres de quince niños con discapacidad que fallecieron en el centro de ayuda estatal en el que vivían debido al recorte presupuestario fruto de la situación económica por la que estaba atravesando el país en el momento de los hechos. El TEDH consideró que se produjo una vulneración del derecho a la vida debido a la inexistencia de medidas preventivas destinadas a impedir dicho daño por parte de las autoridades, las cuales eran conocedoras del riesgo que ello acarrearía.

En consecuencia, los menores quedaron en una situación de «extrema urgencia vital» y, por tanto, imposibilitados para satisfacer adecuadamente sus necesidades más básicas (alimentación, atención médica, higiene y calefacción) y especiales debido a su condición de personas con discapacidad. Las «condiciones de vida tan deplorables» en las que se encontraron las víctimas, que condujeron a su muerte, fueron

el elemento central de la condena. Esta situación, señaló el Tribunal, podría haberse evitado si el Estado no hubiese hecho caso omiso de los indicios con los que contaba, es decir, si hubiese desplegado la obligación positiva de protección de la vida de las víctimas.

En relación con el derecho a la vida encontramos algunos otros casos relacionados con la pobreza, pero donde una privación o carencia relativa se acaba convirtiendo en una privación total o absoluta que, en último lugar, acaba produciendo la muerte de la víctima.

En *Mehmet Sentürk y Bekir Sentürk c. Turquía*, de 9 de julio de 2013, el TEDH consideró vulnerado el derecho a la vida por la muerte de una mujer embarazada que no recibió atención médica (urgente) hasta en cuatro ocasiones y en diferentes hospitales debido a unos fuertes dolores que padecía fruto de su estado. Finalmente, terminó siendo explorada por un profesional médico en el último hospital al que acudió, donde se le hizo saber que, como consecuencia de la muerte del feto, necesitaba someterse a una cirugía de emergencia, para lo cual debía de abonar una cantidad que ni ella ni su familia pudieron sufragar, por lo que no pudo recibir la atención médica oportuna tampoco en este hospital. A consecuencia de todas estas negativas para recibir atención médica, junto a la carencia de recursos económicos, la mujer falleció en la ambulancia mientras le trasladaban a otro hospital donde, en principio, iba a ser atendida de urgencia. El Estado falló en la obligación positiva de protección del derecho a la vida debido a la insatisfacción de esta necesidad (salud).

En este tipo de casos, el Tribunal ha sostenido que la protección del derecho a la vida queda sujeta, obligatoriamente, a la existencia de una previsión de garantía y cobertura de este tipo de situaciones en la legislación doméstica (por ejemplo, acceso a la salud de urgencia) y de que las autoridades conociesen o pudiesen haber conocido el riesgo de sus acciones u omisiones con respecto al derecho a la vida. La obligatoriedad de la previsión en la legislación doméstica, que claramente conecta con la lógica «policentrista», supone un obstáculo que debiera superarse, al menos en lo que respecta a un nivel umbral mínimo.

4.1.2. *Derecho a la protección contra los tratos inhumanos o degradantes (art. 3)*

El contenido de este artículo ha acogido algunos de los casos más importantes en materia de pobreza enjuiciados por el Tribunal. Ha sido también bajo la rúbrica de este artículo que el TEDH, por primera vez, en el año 2011, declaró que la situación de extrema pobreza sufrida por el demandante había sido contraria a la protección brindada por dicho artículo (*M.S.S. c. Bélgica y Grecia*, de 21 de enero de 2011). Esta apertura jurisprudencial ha supuesto un gran avance en la consideración

de la pobreza como un factor contrario al CEDH, aunque, eso sí, haya sido solo con respecto a circunstancias muy extremas y particulares, como veremos más adelante. Pero, antes de todo, hay que detenerse en los antecedentes más inmediatos y en el marco que los mismos fueron dibujando.

El antecedente más conocido radica en la decisión sobre la admisibilidad *Budina c. Rusia*, de 18 de junio de 2009, en la que, pese a la denegación de la admisión por parte del TEDH (a mi juicio incorrecta), se reconoció con cierto énfasis que «[…] *a wholly insufficient amount of pension and social benefits may raise an issue under Article 3 of the Convention*» (p. 5). Una situación de este tipo, a ojos del Tribunal, podría acarrear la imposibilidad de que la reclamante satisficiese adecuadamente las necesidades humanas básicas debido a su total dependencia de la ayuda del Estado para conseguirlo[14]. Aunque la decisión fue desestimatoria, este asunto trajo consigo la posibilidad de ampliar la cobertura de protección del art. 3 CEDH a situaciones «*of serious deprivation or want incompatible with human dignity*» (p. 6).

Otro importante asunto, previo a *Budina*, aunque no tan popular, es *Moldovan y otros c. Rumanía*, de 30 de noviembre de 2005, en el que resultaron vulnerados tanto el art. 3 como el art. 8 CEDH fruto de las «condiciones de vida impropias» (hacinamiento y ambiente insano) en las que se vieron envueltos los reclamantes, miembros del colectivo romaní, tras la quema y destrucción de sus casas por parte de los vecinos del pueblo en el que residían y con la connivencia de algunas autoridades nacionales. En lo que respecta al art. 3 CEDH, el TEDH declaró su violación debido a que las «condiciones de vida y la discriminación racial» (párr. 113) en la que se vieron envueltos se tradujo en un trato degradante, sin que las autoridades hiciesen nada por (intentar) revertir dicha situación. Esta situación de indefensión, razonó el Tribunal, tuvo que haberles generado un sufrimiento mental incompatible con la dignidad humana, así como sentimientos de humillación y de menosprecio, por lo que se alcanzó el umbral requerido para declarar la violación de dicho artículo.

Teniendo en cuenta estos importantes antecedentes, los casos posteriores (junto a *Moldovan y otros*) que se van a explorar lo hacen bajo el grueso del concepto de «grupos (sociales) vulnerables»[15] desarrollado

[14] Este asunto tiene interesantes referencias a otros dos casos previos en los que se abordaron situaciones similares, pero en los que tampoco se reconoció una vulneración de este artículo. Con respecto al ámbito de la insuficiencia de ingresos, véase la decisión de admisibilidad Larioshina c. Rusia, de 23 abril de 2002; y en lo que respecta al ámbito de las personas sin hogar o en situación de calle (*homeless*), véase la decisión de admisibilidad O' Rourke c. Reino Unido, de 16 de junio de 2001.

[15] A lo largo del texto usaré esta terminología o la de «grupos particularmente vulnerables», que es la que está presente en los casos del Tribunal. Con la primera, es decir, con la apelación a «grupos (sociales) vulnerables», me muestro totalmente en contra debido a los riesgos

por el TEDH (Peroni y Timmer, 2013; Al Tamimi, 2016), concretamente en lo que se refiere a las personas solicitantes de asilo.

El primero de estos casos, ya aludido, es, por definirlo de algún modo, el «plato fuerte» de la jurisprudencia del TEDH en materia de pobreza. Me refiero a *M.S.S. c. Bélgica y Grecia*, de 21 de enero de 2011, asunto en el que se examinó «si una situación de pobreza material extrema puede plantear un problema al amparo del art. 3» (párr. 252). El reclamante fue trasladado desde Bélgica a Grecia en base a que fue allí donde, por primera vez, había estado en territorio europeo, por lo que las autoridades belgas determinaron que la competencia para tramitar su estatus correspondía al país heleno[16]. Una vez en Grecia, permaneció durante meses en condiciones infrahumanas, sin ningún medio de subsistencia.

El TEDH ha sido constante en su jurisprudencia al señalar que del art. 3 CEDH no se puede extraer una obligación de los Estados Parte de proveer de alojamiento o de asistencia económica a los solicitantes de asilo para mantener «un nivel de vida determinado». Aplicando los principios del artículo al caso concreto, resultaron dos hechos determinantes para el análisis del Tribunal.

En primer lugar, las obligaciones asumidas en el derecho positivo nacional fruto de la trasposición de la Directiva 2003/09/EC del Consejo, de 27 de junio, sobre normas mínimas para la acogida de los solicitantes de asilo en los Estados miembros, donde se instaba a cumplir con una serie de condiciones mínimas de recepción y trato (necesidades básicas y protección especial)[17].

---

de estigmatización que acarrea, el lenguaje paternalista contrario al enfoque de las capacidades con el que se articula y por el peligro de acabar tratando más la cuestión en términos de «condición humana» que de «situación creada o tolerada». Con respecto a la segunda, soy más sensible, ya que acoge una comprensión de la vulnerabilidad en términos universales (condición humana) y particulares (situaciones sociales–experiencias propias) con la que simpatizo.

[16] Bélgica resultó igualmente responsable de la violación de este artículo debido a que el TEDH sostuvo que, pese a la información, documentación e indicios desfavorables con los que contaba Bélgica acerca de los sobresalientes fallos del sistema de asilo griego, envió al reclamante, contraviniendo la normativa europea, a Grecia, por lo que le expuso al trato degradante del que fue víctima.

[17] En la sentencia recaída en el asunto Sufi y Elmi c. Reino Unido, de 28 de noviembre de 2011, el TEDH adoptó el enfoque de M.S.S. para considerar que el posible traslado de los reclamantes a Somalia hubiese violado el art. 3 CEDH debido a las terribles condiciones humanitarias (imposibilidad de satisfacción de las necesidades más básicas) en las que se hubiesen encontrado fruto del contexto de extrema violencia y por la especial situación y características personales de los demandantes (pertenencia a clanes, inexistencia de arraigo, enfermedad). Pese a ello, la obligatoriedad del requisito de la previsión doméstica respecto del alcance de las obligaciones positivas parece confirmarse en algunos casos posteriores (S.H.H. c. Reino Unido, de 8 de julio de 2013, F.H. c. Grecia, de 31 de octubre de 2014, AL.K. c Grecia, de 11 de diciembre de 2014, A.S. c. Suiza, de 30 de junio de 2015 y Amadou c. Grecia, de 4 mayo de 2016).

En segundo lugar, la consideración del solicitante de asilo como miembro de «[…] un grupo de población particularmente desfavorecida y vulnerable que necesita una protección especial […]», lo que es «[…] objeto de un amplio consenso internacional y europeo […]» (párr. 251).

En definitiva, las extremas condiciones a las que fue expuesto el reclamante, que estuvo «durante meses en la calle, sin recursos, sin acceso a instalaciones sanitarias, sin forma de satisfacer necesidades básicas» (párr. 263) debido a la ausencia de la consideración de su precariedad y vulnerabilidad por parte de las autoridades griegas[18], le dejaron en una posición extremadamente lesiva para su dignidad humana, por lo que «[…] tales condiciones de existencia, junto con la prolongada incertidumbre en la que permaneció y la total ausencia de perspectivas de mejora de su situación, alcanzaron el umbral requerido por el art. 3 del Convenio» (párr. 263).

A estos dos hechos hay que sumar un tercero sin el cual no podría entenderse correctamente el caso, y es que el Tribunal razona de esta forma debido a que la situación de extrema pobreza de la víctima trajo causa en la inefectividad estructural del sistema de asilo griego, el cual acababa perjudicando considerablemente a un buen número de miembros de solicitantes de asilo. Asimismo, hubiese sido interesante que el TEDH analizase el caso bajo el principio de no discriminación, especialmente si se tiene en cuenta que la mayoría de los solicitantes de asilo con los que el reclamante pasó meses en la calle eran de su misma nacionalidad.

Continuando con el estudio de casos, se plantea que la necesidad de «protección especial» de los solicitantes de asilo se agrava cuando hay menores de por medio, debido a que su condición de vulnerabilidad intrínseca prevalece sobre el estatus de inmigrante ilegal, lo que resulta en la necesidad de una mayor diligencia y mecanismos de priorización en la acogida por parte de los Estados en base al «interés superior del menor» (*Popov c. Francia*, de 19 de enero de 2012, *Tarakhel c. Suiza*, de 4 de noviembre de 2014, y *V. M. y otros contra Bélgica*, de 7 de julio de 2015).

El caso *V. M. y otros*, que continúa el enfoque de *M.S.S*. a la hora de analizar las «condiciones de vida de extrema pobreza» de una familia de solicitantes de asilo a cargo de un bebé y una niña con discapacidad,

---

[18] La consideración de los solicitantes de asilo en Grecia como un grupo particularmente vulnerable causó cierta tensión en el seno del TEDH, tal y como refleja el voto particular del juez Sadjó, contrario a la misma. Ello ha dado lugar a un interesante debate académico–doctrinal acerca de qué grupos han de ser considerados como (particularmente) vulnerables, la posible estigmatización que su uso puede acarrear, la identificación, en ocasiones, de la vulnerabilidad con la debilidad (no capacidad de «resiliencia») y la tensión entre las visiones universal y particular de la vulnerabilidad. Véase, entre otros, Anderson (1994), Peroni y Timmer (2013), Truscan (2013), Lavrysen (2015), Flegar (2016), Al Tamimi (2016), La Barbera (2019).

da buena cuenta de la responsabilidad agravada que tienen los Estados en materia de acogida con respecto a los menores. Aquí, debido a los diferentes factores que concurrían sobre las víctimas (romaníes, solicitantes de asilo, menores, con discapacidad, género), el TEDH debería de haber analizado, junto al aspecto material (situación de pobreza), una posible discriminación (multifactorial) por parte de las autoridades belgas. Al igual que en *M.S.S.*, los reclamantes y sus hijos estuvieron en situación de calle junto a otros solicitantes de su misma nacionalidad. Tal vez, si el Tribunal hubiese emprendido ese análisis, habría podido declarar la existencia de algunas deficiencias estructurales del sistema de asilo belga que algunos indicios parecían señalar.

Un punto insuficientemente claro en la jurisprudencia del TEDH ha sido el de si la previsión de la legislación nacional es un requisito indispensable para poder declarar la violación del art. 3 CEDH. La jurisprudencia del TEDH, cuando ha habido menores de por medio, ha ido arrojando un poco más de luz sobre este asunto. A mi modo de ver, en *Tarakhel c. Suiza*, de 4 de noviembre de 2014, y V. M. y otros, se encuentran algunos vestigios que permiten considerar que este requisito no ha de ser estrictamente fundamental y que la simple previsión de la normativa europea (¿e internacional?) podría servir como base jurídica para declarar una determinada situación como contraria al art. 3 CEDH. Es por ello que mi parecer concurre con la tesis (parcial) de Barcelona (2017: 348) en favor de dicho reconocimiento.

Estas dudas acaban por resolverse en *R. R. y otros c. Hungría*, de 5 de julio de 2021. Del análisis de las «condiciones de vida» de la familia de solicitantes de asilo, los cuales pasaron meses retenidos en una zona de tránsito y entre los que había menores, el Tribunal destacó que el padre estuvo en una situación de extrema pobreza en la que fue incapaz de atender sus necesidades más básicas (por ejemplo, se alimentaba de las sobras que dejaba su familia) debido a que la legislación húngara preveía que si a una persona se le había denegado previamente una solicitud de asilo, esta no tendría derecho a cuidados, asistencia y alojamiento (párr. 24). Aunque el Tribunal reconoció que el Estado estaba legitimado para reducir, o incluso retirar, las condiciones materiales de acogida, sostuvo que una decisión tan drástica para el porvenir de una persona como la que adoptaron las autoridades húngaras, debería haberse tomado acorde al «principio de proporcionalidad» presente en el art. 20.5 de la Directiva 33/2013 sobre «normas para la acogida de los solicitantes de protección internacional»[19].

[19] Este artículo dispone lo siguiente: «5. Las decisiones de reducir o retirar el beneficio de las condiciones materiales de acogida o las sanciones a que se refieren los apartados 1, 2, 3 y 4 del presente artículo se tomarán de forma individual, objetiva e imparcial y estarán motivadas. Las decisiones se basarán en la situación particular de la persona en cuestión, especialmente por lo que respecta a las personas a que se refiere el art. 21, teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad. En cualquier caso, los Estados miembros asegurarán el acceso a la atención

En este sentido, a partir del examen del caso a través del «juicio de proporcionalidad», el TEDH se decantó por considerar que la normativa europea se anteponía a la legislación doméstica, lo que resultó en que el Estado falló en la provisión de las garantías de acogida con respecto al reclamante (nivel de vida adecuado), las cuales encuentran su versión mínima en la obligatoriedad de la provisión de acceso a la atención sanitaria y en el aseguramiento de unas «condiciones de vida dignas» (necesidades humanas básicas). En base a ello, el Tribunal sostuvo que las alegaciones del demandante estuvieron suficientemente fundamentadas, lo que condujo a declarar que su situación había alcanzado el umbral requerido para declarar la vulneración del art. 3 CEDH.

Esta salvaguarda, tal y como se recoge en la legislación europea al efecto, ha de ser singularmente tenida en cuenta respecto de aquellas personas (particularmente) vulnerables como, por ejemplo, los menores, por lo que cabe confirmar que, si es posible anteponer el Derecho europeo al nacional en una situación de extrema pobreza en la que se ve envuelto un solicitante de asilo adulto y varón, por descontado que los requisitos deben flexibilizarse cuando el asunto concierne a personas solicitantes de asilo (particularmente) vulnerables debido a la(s) condición(es) que determinan su identidad (mujeres, menores…).

A modo de recapitulación, siguiendo a Pribytkova (2019: 342–344), puede concluirse que son cuatro los requisitos que la interpretación del Tribunal prescribe para poder declarar vulnerado el art. 3 CEDH en lo que respecta a las *living conditions* de las personas en situación de pobreza.

En primer lugar, el deber de asegurar un «estándar adecuado de vida», que encuentra su límite en la dignidad humana, ha de resultar de la obligación dispuesta en el Derecho positivo nacional o de la obligación legal bajo la normativa europea (¿e incluso internacional?).

En segundo lugar, el reclamante ha de encontrarse en una situación de total dependencia respecto del Estado, es decir, necesita de las autoridades estatales para la satisfacción adecuada de sus necesidades básicas. Este requisito lo extrae el TEDH de los casos de personas privadas de libertad.

En tercer lugar, ha de cumplirse con un *minimum level of severity*, que es un criterio relativo y difuso, por medio del cual se identifican aquellas situaciones de privación seria o de necesidad incompatibles con la dignidad humana *(serious deprivation*).

En cuarto y último lugar, es necesario que el reclamante o los reclamantes demuestre(n) que su situación, producida por la falta de los

---

sanitaria de conformidad con el art. 19 y garantizarán condiciones de vida dignas para todos los solicitantes».

medios o recursos oportunos, se traduzca en un concreto sufrimiento (mental o físico o ambos) que atente contra su dignidad.

Habrá quien defienda que otro requisito sería la pertenencia a algún colectivo (particularmente) vulnerable, aunque ello, más allá de que sería un considerable error, no encuentra más explicación que el rígido y exigente nivel del umbral articulado por el Tribunal, donde solamente caen bajo su conocimiento situaciones de pobreza especialmente sangrantes y urgentes en las que, desafortunadamente, suelen encontrarse, en la mayoría de las ocasiones, sujetos pertenecientes a estos grupos.

Queda la duda de si el Tribunal, en el futuro, podrá acoger como contraria al art. 3 CEDH alguna situación de pobreza en la que la víctima no pertenezca a ninguno de los colectivos que este ha considerado como «particularmente vulnerables». La decisión Budina es un buen antecedente sobre el que poder ampliar el rango de beneficiarios y reflejar los diferentes rostros de la pobreza, sus múltiples causas y manifestaciones y, además, contribuiría a la desestigmatización (grupo social–vulnerabilidad–debilidad), aunque precisaría de un cambio de rumbo en la argumentación del Tribunal que pasa, a mi modo de ver, por la flexibilización del contenido de las *living conditions*. Y ello podría ser perfectamente factible, tal y como ha demostrado el asunto R. R. y otros.

4.1.3. *Derecho al respeto a la vida privada y familiar (art. 8)*

En contraposición a los anteriores artículos convencionales, el art. 8 CEDH sí puede ser objeto de interferencias legítimas por parte del Estado, siempre y cuando respeten el «principio de proporcionalidad». Ello se traduce en que los intereses alegados por el Estrado han de ser tan relevantes como para dejar sin efecto las garantías de protección de dicho artículo. Asimismo, la evaluación de las obligaciones positivas queda condicionada por los criterios de búsqueda de un «equilibrio justo» y del «margen de apreciación».

Los asuntos que aquí interesan versan sobre el ámbito de las garantías socioeconómicas respecto de la conservación de la unidad familiar ante situaciones de precariedad material y el espacio de la vivienda.

En lo que se refiere a la unidad familiar, la sentencia recaída en *Wallowá y Walla c. República Checa*, de 2 de octubre de 2006, declaró violado el art. 8 CEDH debido a la separación de los reclamantes de sus hijos como consecuencia de la imposibilidad de proveerles de una vivienda adecuada. El Tribunal, en base a su jurisprudencia, señaló que los Estados, además de las obligaciones negativas de no interferencia, también cuentan con obligaciones positivas para la adopción de aquellas medidas oportunas para hacer valer la garantía del respeto de la vida privada y familiar.

En este tipo de casos relativos a la unidad familiar, el criterio del *fair balance* se inclina siempre, como no podía ser de otra manera, a favor del «interés superior del menor», por lo que la separación de estos de sus progenitores es una medida que el TEDH ha catalogado como de *serious interference* (párr. 70) en la vida familiar. Ello supone que el Estado ha de acreditar la persecución de un fin legítimo que responda a «una necesidad social acuciante» en un entorno democrático.

En el caso concreto, el Tribunal resolvió que el Estado no ajustó sus medidas al «principio de proporcionalidad», y eso pese a que el interés alegado (fin) fue acorde con el beneficio del menor, ya que la imposibilidad de proveer de un adecuado alojamiento a los menores por parte de sus progenitores era un hecho que las autoridades sociales del Estado podían haber ayudado a revertir (obligaciones positivas) sin la necesidad de adoptar una medida tan gravosa como la ruptura de la unidad familiar.

En *R.M.S. c. España*, de 18 de junio de 2013, el TEDH declaró igualmente vulnerado el derecho a la vida familiar debido a la separación de la reclamante de su hija menor de tres años debido a la situación de «indigencia» (carencia material) en la que los servicios sociales del Estado declararon que se encontraban tanto la madre como la menor. Este contencioso, similar al anterior, aporta, en materia de pobreza, un ingrediente novedoso mediante el cual se muestra fehacientemente cómo funciona el criterio del «margen de apreciación» respecto de las obligaciones de los Estados. Así, el Tribunal señaló que «[…] no le compete sustituir la valoración de las Autoridades nacionales competentes por la suya, en lo que respecta a las medidas que deberían haber sido tomadas, ya que esas autoridades están, en principio, mejor situadas para proceder a una tal valoración […]» (párr. 80).

Y es que este razonamiento cobra sentido pese a que el Tribunal reconoció que las medidas adoptadas por el Estado condujeron a la violación del artículo al efecto, lo que acarreó consigo la ruptura del vínculo familiar, de manera irreversible, debido al dilatado paso de los años.

Este órgano, que ha asumido como uno de sus principios que los derechos han de ser «reales y efectivos» y no meramente formales, no puede conformarse con declarar violado un derecho y reconocer, al mismo tiempo, que no tiene competencia alguna para intentar afrontar o revertir las consecuencias de la medida que llevaron a la violación en base al «margen de apreciación de los Estados». En este sentido, el TEDH podría ayudar a los Estados en el cumplimiento de las obligaciones de respeto y garantía de los derechos humanos indicando algunas

medidas que fortalecerían o, más bien, ayudarían a su cumplimiento efectivo[20].

Aunque es innegable que el Tribunal protege el derecho a la vida privada y familiar al considerar que no solamente basta para romper la unidad familiar la (temporal) imposibilidad de proveer una vivienda adecuada o la carencia de recursos materiales, su quehacer da cuenta de las insuficiencias de este órgano para hacer efectivamente reales los derechos que declara vulnerados (por ejemplo, medidas reparatorias para la restitución del vínculo familiar).

En lo que respecta al ámbito de la vivienda[21], los asuntos *Yordanova y otros c. Bulgaria*, de 24 de septiembre de 2012, *Winsterstein y otros c. Francia*, de 17 de octubre de 2013 y *Hirtu y otros c. Francia*, de 14 de agosto de 2020, son los que mayor resonancia han tenido. Estos casos versan sobre los desalojos de romaníes de asentamientos informales en terrenos públicos en los que llevaban bastante tiempo viviendo con la connivencia de las autoridades domésticas que, de facto, los habían permitido[22]. El Tribunal valoró si las medidas de desalojo acordadas por las autoridades nacionales respetaron las garantías previstas en el art. 8 CEDH, es decir, si existió una «necesidad social acuciante» que justificase dicho desalojo, así como si hubo soluciones alternativas reales y efectivas (obligaciones positivas). El Tribunal reconoció que

---

[20] A lo largo del tiempo, el TEDH ha ido ampliando y perfeccionando el contenido de sus sentencias, especialmente en lo que se refiere a las medidas de reparación, aunque no ha alcanzado el nivel de, por ejemplo, la Corte IDH. Pese a ello, en la fase actual, a la labor del TEDH se le ha apodado como etapa de las «sentencias de plena jurisdicción», mediante las que hace recomendaciones o acoge medidas prescriptivas en el contenido de sus sentencias. Esto ha supuesto un considerable avance, tal y como ha sostenido García Roca (2019: cap. 5). Para el asunto concreto de la pobreza, «la garantía de no repetición», especialmente las «sentencias piloto» o las «reformas estructurales», debería(n) de ser considerablemente tenida(s) en cuenta. Para alcanzar esta «lógica reparativa», argumento líneas abajo en favor de un criterio o estándar de «mínimo garante» y junto a otros términos.

[21] En este ámbito, el TEDH utiliza diferentes términos que pueden resultar confusos. Entre ellos, se encuentran *housing*, *shelter*, *accomodation*, *dwelling* y *home*. A mi modo de ver, bajo la noción de *housing*, se abarca, de una mejor forma, el contenido de cada uno de estos diferentes términos. Además, este juega con la ventaja de que su contenido se vincula con una mayor exigencia en las condiciones materiales y el respeto de la dignidad humana. Asimismo, conviene aclarar que he traducido el concepto autónomo *home* usado por el Tribunal por «hogar» en base a que considero que el sentido que este pretende insuflarle conecta mejor con el significado de esta palabra en la lengua castellana. El TEDH ha señalado que *home*, como concepto autónomo, es una noción ajena a la legislación doméstica y que no se limita a aquellas viviendas que se ocupan legalmente, sino que su consideración depende de ciertas circunstancias fácticas que acrediten «suficientes y permanentes vínculos» con el lugar específico (por ejemplo, el caso Winsterstein, párr. 69). Mi interpretación difiere, por ejemplo, de la de Bouazza Ariño (2021: 9–11), que lo traduce por «domicilio», la cual considero profundamente ajena al parecer que le imprime la jurisprudencia del TEDH.

[22] Este requisito de «larga duración» parece haberse flexibilizado por el Tribunal, ya que en Hirtu y otros los reclamantes solamente llevaban alrededor de unos seis meses asentados en el lugar de la disputa.

el fin perseguido por las autoridades fue totalmente legítimo, pero que fallaron a la hora de evaluar adecuadamente las posibles consecuencias de los desalojos para los reclamantes.

El requisito de la proporcionalidad falló porque el Estado no tuvo en cuenta correctamente ni los intereses de los demandantes (su especial situación y su estilo de vida) ni la posibilidad de que estos terminasen en una situación de *homelessness*, extremo que afectó o hubiese afectado negativamente sobre su desarrollo personal y humano. En este sentido, las autoridades nacionales debieron haber buscado otras fórmulas menos drásticas en las que se hubiesen valorado adecuadamente las posibles consecuencias de los desalojos y las particularidades de los reclamantes. Además, un hecho que conviene no olvidar es que en Yordanova, el Tribunal abrió la puerta a la posibilidad de que el *right to shelter* «*to particularly vulnerable individuals may flow from Article 8 of the Convention in exceptional cases* […]» (párr. 130), lo que, ciertamente, reforzaría el ámbito de las garantías socioeconómicas y evitaría, en buena parte, situaciones de indigencia[23].

Un reciente caso, aunque la vivienda no fue el eje central de la reclamación, pero que sí merece nuestra atención por la especial repercusión y afectación que tiene sobre esta, es *Hudorovic y otros c. Eslovenia*, de 7 de septiembre de 2020, en la que el Tribunal abordó dos reclamaciones de varias comunidades romaníes asentadas en campamentos informales, las cuales alegaron su inadecuado acceso al agua potable y el saneamiento, por lo que reivindicaron su derecho al goce adecuado, correcto y efectivo de estos servicios básicos.

El TEDH, pese a estimar que estas peticiones caían bajo la órbita de protección del art. 8 CEDH, no llegó a la conclusión de que este hubiese sido violado, al considerar que las medidas que las autoridades municipales eslovenas habían adoptado a lo largo de los años cumplieron con las expectativas jurisprudenciales exigidas, además de que tuvieron en cuenta la consideración de los reclamantes como miembros de un «grupo particularmente vulnerable»[24]. Igualmente, también se tuvo en cuenta que los reclamantes no se encontraban en una situación

---

[23] *Shelter* en castellano se refiere a «albergue» o «refugio», por lo que parece que el Tribunal, en caso de que en algún momento reconociese tal derecho, lo haría en su versión mínima (tener un techo). Hasta qué punto esa posible cobertura sería efectiva es una discusión que aquí no será abordada, pero sobre la que sería conveniente reflexionar.

[24] Debido a las limitaciones presentes en la legislación eslovena, el TEDH consideró que las alternativas brindadas por las autoridades municipales (tanques de agua y la no intromisión en la instalación de fosas sépticas) habían cumplido con las expectativas de las obligaciones positivas. Aquí estoy de acuerdo con la opinión disidente de los jueces Pavli y Kuris en lo que se refiere a la aprobación de estas medidas como adecuadas por parte del Tribunal, extremo que encontró su razón de ser a través del uso de factores no homologables como la lejanía de los campamentos y el silencio sobre los obstáculos al suministro, así como por la ausencia del reconocimiento de la «fundamentalidad» de estos derechos (véase párrs. 12–13 del voto discrepante).

de extrema pobreza porque eran receptores de beneficios sociales que les permitían mantener un cierto nivel de subsistencia o, incluso, la mejora de sus propias condiciones de vida (párr. 149).

Desde mi punto de vista, aunque comparto con el Tribunal que los reclamantes no se encontraron en una situación tan extrema como la de *M.S.S.* o *R. R. y otros*, el Tribunal perdió una buena oportunidad para reconocer la «fundamentalidad» de estos derechos en el adecuado y correcto funcionamiento del conjunto de los derechos convencionales. Este reconocimiento, más allá de que precisaría de una flexibilización de los diferentes *minimum levels of severity* que hemos venido examinando (*serious threat, serious deprivation* y *serious interference*), podría haberse llevado a cabo teniendo presentes las consecuencias adversas que el no adecuado acceso a dichos servicios genera sobre la satisfacción de las necesidades humanas básicas y el desarrollo humano en general, más si cabe respecto de aquellos individuos considerados por el propio Tribunal como particularmente vulnerables[25].

Recientemente, el Tribunal ha examinado un caso de mendicidad bajo la lupa del art. 8 CEDH que, aunque no versa sobre las obligaciones positivas, sí que merece ser objeto de análisis ya que versa sobre una de las manifestaciones más sangrantes de la pobreza.

Me refiero a *Lacatus c. Suiza*, de 19 de abril de 2021, en el que el TEDH examinó si la prohibición de mendigar prevista en la legislación suiza era acorde o no con el derecho al respeto de la vida privada consagrado en el art. 8 CEDH. El Tribunal sostuvo que la extrema vulnerabilidad de la demandante (pobre, analfabeta, soledad, origen social) hizo que mendigar fuese el único medio a su alcance para intentar sobrevivir, por lo que el Estado se extralimitó en su «margen de apreciación» al prohibir esta actividad de forma generalizada sin valorar otras posibles alternativas menos lesivas (prohibiciones parciales, no sanciones penales…). Ello resultó, finalmente, en la violación del contenido del art. 8 CEDH. Sobre este caso me gustaría hacer algunas anotaciones.

Pese a que concuerdo con el Tribunal en que el Estado se extralimitó al prohibir la mendicidad, creo que este se podría haber pronunciado acerca de las alternativas (art. 12 de la Constitución Suiza) que el Estado reivindicó para avalar dicha prohibición. En este punto, a la luz del caso, el TEDH, casi con total seguridad, hubiese llegado a la conclusión de la inefectividad de dicha alternativa, es decir, del incumplimiento

[25] Un caso interesante vinculado con el acceso a la vivienda, aunque no fue resuelto bajo la lógica del art. 8 CEDH ni involucró a romaníes, es el asunto Garib c. Países Bajos, de 6 de noviembre de 2017, el cual suscitó mucha controversia en base a la negativa del Tribunal a no reconocer violado el derecho a la libertad de elección de la residencia de una reclamante que reclamó que su derecho se había visto vulnerado debido a que la legislación holandesa determinaba y limitaba su libertad de elección en base a sus recursos económicos.

de las obligaciones positivas. Esta ausencia denota el parcial rechazo por parte del TEDH a profundizar en el examen de cuestiones, también de carácter estructural, que influyen en el porvenir de los que peor se encuentran, extremo que parece reservarse únicamente a situaciones muy puntuales (por ejemplo, deficiencia del sistema de asilo o grupos particularmente vulnerables).

A ello hubiese ayudado, a mi modo de ver, que el Tribunal, que reconoció la (situación de) vulnerabilidad de la reclamante en base a su situación de pobreza (indigencia), hubiese abierto la puerta al reconocimiento de la discriminación debido a su origen social (factor que influyó en la consideración de su vulnerabilidad), fortuna o, incluso, cualquier otra situación (art. 14 CEDH)[26]. Igualmente, hubiese sido interesante, como señaló el juez Lemmens en su voto particular, haber abordado el asunto también desde la óptica del derecho a la libertad de expresión y el art. 3 CEDH.

Así las cosas, la protección contra la pobreza en el ámbito del art. 8 CEDH, de nuevo con Pribytkova (2019: 344–345), queda sometida al cumplimiento de algunos requisitos: en primer lugar, que esté prevista la obligación positiva para el Estado de asegurar un «estándar decente de vida» que, como hemos visto, en algunas ocasiones se queda más en simple retórica que en un verdadero hecho real y efectivo; en segundo lugar, que el impacto de la *serious interference* sobre estos derechos sea tan alto que cumpla con el «nivel de severidad» al efecto; y, en tercer lugar, que se tenga en cuenta el *fair balance* entre los intereses de los individuos y los de la comunidad, donde el «margen de apreciación» del que gozan los Estados es, a mi parecer, excesivamente amplio.

4.2. Comentarios a la doctrina jurisprudencial: potencialidad e insuficiencias

Antes de ahondar en el núcleo que refiere el título de este apartado, aludiré, brevemente, a algunos aportes jurisprudenciales que aquí no he tratado, pero que, considero, merecen cierta atención. En este sentido, no quiero dejar de señalar las contribuciones provenientes de los arts. 14 CEDH y 1 del Protocolo Adicional Primero al CEDH[27].

---

[26] En el siguiente apartado explico el potencial que el propio Tribunal ha reconocido, en materia de acciones afirmativas, a este art. 14 CEDH. La situación de vulnerabilidad (temporal) de la víctima también fue reconocida en R.M.S., la cual tampoco se la consideró perteneciente a ningún colectivo particularmente vulnerable, pero donde podría haberse, igualmente, examinado el caso bajo alguna de estas categorías de no discriminación. Estas categorías son interpretables en favor de diferentes factores, así como no son una lista taxativa y cerrada.

[27] Otros artículos, como el 6 y el 13 CEDH, también contienen algunas aportaciones que convendría no desechar. Por destacar un ejemplo muy reciente, véase el asunto Camara c. Bélgica, de 18 de julio de 2023, donde el TEDH consideró vulnerado el art. 6 CEDH como

En lo que respecta al art. 14, donde se dispone la prohibición general de discriminación —aunque, conviene recordar, su operatividad viene determinada por su relación de dependencia con respecto al resto de derechos convencionales— la jurisprudencia del Tribunal ha sido constante en recordar que «[…] *that provision not only does not prohibit a member State from treating groups differently in order to correct "factual inequalities" between them but, moreover, in certain circumstances a failure to attempt to correct inequality through different treatment may in itself give rise to a breach of Article 14*» (*Yordanova y otros*, párr. 129). Esta reflexión avala la posibilidad de llevar a cabo lo que se ha denominado como «trato diferencial».

En la literatura especializada en el tema, este enfoque diferencial implica la posibilidad (gradual) de adopción de medidas de carácter inmediato (acciones afirmativas) y de medidas de desarrollo progresivo (medidas en pro de la igualdad). Ello supone un escalonado desarrollo de este tipo de medidas con el objetivo de intentar revertir las desigualdades sociales, lo que supone, en última instancia, un reconocimiento integral del principio de igualdad y no discriminación (ius cogens). Esta comprensión dual del artículo (igualdad formal e igualdad sustantiva) ostenta singular importancia, ya que abre la puerta al análisis, examen y corrección de los (o algunos) factores estructurales que promueven situaciones de desequilibrio (intenso) entre las personas.

Con respecto al art. 1 del Protocolo Adicional Primero, la jurisprudencia del Tribunal ha ampliado la noción de «bienes» (*posessions*) a algunas prestaciones sociales (contributivas y no contributivas), lo que ha supuesto que estas queden cubiertas por la protección de las garantías del derecho a la propiedad. Los principales ámbitos en los que se ha consagrado esta protección han sido los de la vivienda social, las pensiones y los beneficios sociales para los desempleados, lo que ha repercutido en que las reducciones, denegaciones o anulaciones de este tipo de prestaciones acaben declarándose, dependiendo del caso, como una interferencia en el disfrute pacífico de las mismas (Lavrysen, 2015: 300–301).

El Tribunal ha insistido en que este derecho no implica un derecho concreto a adquirir propiedad alguna, sino que implica un examen bajo la lupa de los criterios del «justo equilibrio» y del reconocimiento en la legislación estatal de tales prestaciones (Pérez Alberdi, 2011: 98–99; López Guerra, 2015: 402–403; Bonet Pérez, 2016: 171–172; Morte Gómez, 2018: 552–553; Pribytkova, 2019: 345–346; Herreros López, 2023). Esta protección bajo el derecho de propiedad supone una garan-

---

consecuencia de la negativa de las autoridades belgas a cumplir la orden judicial que les obligaba a proveer de los servicios de alojamiento y asistencia material al reclamante (solicitante de asilo). Este incumplimiento dio lugar a que el demandante pasara meses en situación de calle.

tía, desde luego, nada desdeñable para la salvaguarda contra (el riesgo de) la pobreza y la exclusión social.

Una vez apuntados estos aspectos, prestemos atención a las que, a mi parecer, son las principales potencialidades y los límites de la jurisprudencia del TEDH en relación con la pobreza.

Por un lado, entre las potencialidades, encontramos, en primer lugar, que la extensión del contenido de los artículos convencionales contribuye a resaltar la imperiosa necesidad de garantizar algunas garantías socioeconómicas para el adecuado, efectivo y real funcionamiento de los derechos convencionales. Ello refuerza, sin lugar a duda, la visión interdependiente e indivisible de los derechos humanos y la sensación (realista) de que el Convenio, por medio de la labor del Tribunal, promueve la defensa (en algún grado) del *freedom from poverty*.

En segundo lugar, el uso del concepto de «grupo (particularmente) vulnerable» juega un papel realmente decisivo. Como han señalado Peroni y Timmer (2013: 1065), ha sido a través de este concepto, que el TEDH ha conseguido poner el foco de atención sobre algunos factores (sociales, políticos, económicos, jurídicos) que repercuten en el péndulo *maldistribution–misrecognition*[28], aunque en la mayoría de las ocasiones este ha sido abordado de forma separada.

Algunas de las reflexiones apuntadas a lo largo del examen de casos transitan en la dirección de intentar mostrar las dificultades que implican que estas se analicen de forma aislada o que, directamente, ni se analice alguna de ellas. En la mayoría de las ocasiones, una carencia de recursos o medios materiales implica, igualmente, problemas en el espacio del reconocimiento, lo que puede acabar dando pie a situaciones de estigmatización, vergüenza y aislamiento. El TEDH, que parece ser consciente de este riesgo cuando apela a la «protección especial», debería de adoptar, en este sentido, un punto de vista más profundo que conecte con ese péndulo.

En tercer lugar, el Tribunal ha ido desarrollando, con el paso del tiempo, distintos «umbrales» que conforman su razonamiento jurisprudencial, y eso ha sido algo positivo, ya que le ha permitido poder abordar algunos casos de injusticia social. Pese a que estos umbrales, como ya se apuntó, no son excesivamente claros, sí que permiten hacerse una idea del tipo de situaciones que captan la atención del Tribunal (*serious threat*, *serious deprivation* y *serious interference*), aunque, en ocasiones, los vaivenes de la doctrina jurisprudencial flexibilizan e, incluso, nivelan demasiado a la baja tales umbrales (recuérdese lo apuntado en *Hudorovic y otros*).

---

[28] Para un uso similar del término, véase Ganty (2020). El origen de este término se encuentra en la obra de la filósofa política Nancy Fraser.

Asimismo, los casos examinados muestran que el TEDH acoge distintos tipos de situaciones en relación con la pobreza.

Por un lado, aquellas vinculadas con una dimensión de privación absoluta y que se corresponden con: 1) situaciones de extrema pobreza donde existe una clara privación absoluta de algunas áreas vitales fundamentales (*Nencheva y otros*, *M.S.S. y Lacatus*); 2) situaciones de privación absoluta en algún espacio considerado tan sumamente importante (alimentación) que causa el mismo (o muy similar) tipo de sufrimiento que si se viese afectado en más de un área vital fundamental (*R. R. y otros*).

Por otro lado, aquellas que se corresponden con: 1) situaciones de privación o carencia relativa que terminan convirtiéndose en una privación absoluta en algún área fundamental o particularmente importante (*R.M.S.* y *Wallová y Walla*) o, incluso, de la propia vida (*Mehmet Sentürk y Bekir Sentürk*); 2) situaciones en las que una privación relativa en una o más áreas queda asociada con un estilo de vida particular no convencional y que, por diversos motivos, puede acabar suponiendo una privación absoluta en una o más áreas vitales fundamentales, así como acabar dañando ese estilo de vida (*Yordanova y otros*, *Winsterstein y otros*, *Hirtu y otros c. Francia*, y *Hudorovic y otros*).

Finalmente, a diferencia de Pribytkova (2019: 336–337), aunque estoy de acuerdo en que el TEDH no da una definición concreta de pobreza, sí que refiere algunas alusiones que pueden ayudar a hacernos una idea del tipo de noción(es) presente(s) en sus razonamientos. Los casos vinculados con la extrema pobreza se han entendido por parte de este como la imposibilidad de satisfacer aquellas necesidades (más) básicas (needs) esenciales para la conservación de la vida humana y para un ejercicio mínimo de los derechos humanos (alimentación, vivienda y tratamiento médico esencial).

En los asuntos concernientes a individuos considerados como particularmente vulnerables, la satisfacción de dichas necesidades tiene que ir acompañada del requisito de «protección especial» (por ejemplo, reconocimiento del concepto autónomo de home). El espacio de las needs también acoge aquellos casos de privación relativa–absoluta a los que me he referido anteriormente.

En lo que respecta a otras situaciones de pobreza más moderada o general, aunque es cierto que no contamos con suficientes elementos para un análisis profundo (solamente Budina y los casos vinculados al art. 1 del Protocolo Adicional al CEDH), me atrevería a aventurar que el Tribunal la entiende en términos de *necessities*, es decir, con la carencia o privación en el acceso y disfrute de aquellos otros servicios o bienes básicos que tienen igual importancia para el adecuado desarrollo de la vida humana, pero que, a ojos del Tribunal, parecen no ser considerados

como tan elementales (vestimenta, servicios culturales y sanitarios…)[29]. Las *necessities* serían una cuestión de derechos sociales, mientras que las needs se asocian con las garantías protegidas. Aquí, claramente, entran en juego los criterios absoluto (*needs*) y relativo (*necessities*) de la pobreza.

Por otro lado, entre las limitaciones jurisprudenciales, trascendiendo el escollo del contenido convencional, sostengo, al igual que García Manrique (2020: 300), que la principal insuficiencia es la ausencia de un criterio adecuado en el que pudiesen concurrir todas las garantías socioeconómicas y sustituyese a los *minimum levels of severity* tan exigentes dispuestos hasta el momento[30]. En otras palabras, el Tribunal, que cuenta con las herramientas y la habilidad jurídica, así como con la oportuna experiencia, debería de confeccionar un verdadero «mínimo garante»[31] en el que poder aglutinar toda su tarea de especificación jurisprudencial elaborada a lo largo de todos estos años.

En este sentido, este «mínimo garante», que no debería conformarse con un «suficientarianismo desconectado»[32] ni pretender alcanzar una igualdad completa, permitiría contar con un criterio o estándar de interpretación que ayudase a identificar, comprender y resolver de una mejor forma los casos en los que la situación de pobreza sea un factor central o considerable. Entonces, este criterio, que tiene por principal objetivo la salvaguarda y garantía de la dignidad humana, tendría, además, que ser lo suficientemente amplio como para cumplir con el principio de que los derechos han de ser «reales y efectivos» y ser sensible a la realidad del momento.

---

[29] Conviene señalar que Pribytkova, pese a que no resulta del todo clara, también se refiere a *necessities* como *other needs*, aunque el contenido de ambas alude a derechos sociales vinculados a las necesidades básicas y más allá del espacio de las garantías socioeconómicas. Para más información, véase Pribytkova (2019: 351–352).

[30] Los aspectos de *serious threat*, *serious deprivation* y *serious interference* deberían de seguir siendo totalmente operativos, ya que dan cuenta de la esencia del daño o de la privación al efecto.

[31] Véase López Guerra (2015: 404–405), que ha denominado a esto «garantía de un nivel mínimo de bienestar».

[32] Un ejemplo lo encontramos en el caso Hudorovic y otros, donde, como sostuvieron los jueces Pavli y Kuris en su voto disidente, resulta muy complicado de entender y de justificar cómo es posible que el Tribunal haya podido considerar que situaciones de contaminación acústica u olores desagradables hayan supuesto una afectación del contenido del art. 8 CEDH y no así el inefectivo acceso al agua potable y el saneamiento. A esto hay que añadir el peligro de conformar lo «suficiente» en un nivel umbral demasiado bajo e, incluso, como en tal contencioso, con fuertes indicios de un trato inequitativo (si lo «suficiente» para la mayoría de los vecinos del pueblo era el acceso efectivo al agua potable y el saneamiento, para la comunidad de romaníes lo fue el acceso inefectivo a través de la provisión de tanques de agua y fosas sépticas). Casal (2007) expone desde el ámbito de la teoría política los principales aspectos de los límites y las potencialidades del «suficientarianismo», así como hace suya la reflexión de que la suficiencia importa, pero no resulta del todo suficiente.

Pese a lo anterior, un asunto que resulta del todo controvertido es el de precisar el contenido de ese «mínimo garante». Lo primero que hay que apuntar es que este no ha de ser ni rígido ni estático, sino que debería de ser flexible y abierto a la realidad social del momento. Cada sociedad o región ostenta sus propias particularidades y cuenta con diferentes mecanismos y recursos, extremos que son determinantes a la hora de intentar elaborar y aplicar un requisito como el que aquí se propone. Pese a ello, resulta del todo posible señalar la importancia de algunos elementos o áreas determinantes y compartidas para la garantía de un adecuado desarrollo humano. Este sentido es el que apuntan artículos como el 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales o el 30 de la Carta Social Europea (CSE), que pueden sintetizarse en el «derecho a un nivel de vida adecuado».

El art. 30 CSE es una disposición única y exclusiva a nivel internacional que consagra la protección contra la pobreza y la exclusión social, y en la que el TEDH podría apoyarse para la elaboración de este «mínimo garante» planteado. Este artículo, que consagra « […] el acceso efectivo, en particular al empleo, a la vivienda, a la formación, a la enseñanza, a la cultura, y a la asistencia social y médica […]» brinda dos importantes ventajas.

En primer lugar, no supondría un ejercicio de interpretación excesivamente complicado al encontrarse consagrado dentro del sistema europeo, así como reforzaría la visión sistémica de los derechos humanos, que no es ajena al TEDH (interdependencia e indivisibilidad, sinergias con el CEDS…). En segundo lugar, la expresión «el acceso efectivo, en particular […]» cumple con los requisitos de flexibilidad y apertura aludidos, lo que daría lugar a la posibilidad de introducir otros elementos o áreas igualmente importantes. A mi modo de ver, los Principios Rectores sobre Extrema Pobreza y Derechos Humanos (2012) es el texto internacional más elaborado en el que debería de inspirarse una tarea como la que aquí se propone[33].

Pero, ahora toca responder a la siguiente cuestión: ¿Cómo podría saber el Tribunal que ese criterio no ha sido respetado y que, por tanto, se activa una demanda de derechos humanos (urgente)?

El «criterio de adecuación» desarrollado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (en adelante CESCR por sus siglas en inglés) ayudaría a responder esta cuestión, ya que cobija los «elementos esenciales» (accesibilidad, disponibilidad, aceptabilidad, adaptabilidad y calidad) y las «obligaciones básicas» im-

[33] En un plano normativo, la lista de las «capacidades centrales» de Nussbaum (2012a; 2012b) completa aún más el contenido de estos Principios Rectores, ya que incorpora áreas como la del ocio o la relación con la naturaleza (medioambiente) que son igualmente importantes.

postergables para cumplir correctamente con el nivel umbral adecuado de un «mínimo garante»[34] (Parra Vera, Villanueva Hermida y Enrique Martin, 2008: 154–155; Pribytkova, 2019).

Este criterio desarrollado por el CESCR, además, previene contra el riesgo advertido de un «suficientarianismo desconectado», ya que prescribe que algunas medidas han de ser decididamente igualitarias y no conformarse con la suficiencia (por ejemplo, el acceso igualitario al derecho al agua y saneamiento). Ello agrega que, a través de la lógica de las «obligaciones inmediatas» y de las «obligaciones progresivas», este criterio logre la entrada de un marco de actuación en consonancia con una perspectiva suficientaria–prioritarista–igualitaria. Esta perspectiva facultaría para conocer de situaciones de privación absoluta y relativa, aunque estas últimas quedarían limitadas a aquellas que pudiesen acabar o corriesen el riesgo de acabar convirtiéndose en absolutas[35].

Asimismo, este mínimo no debería de depender de la previsión de salvaguarda y promoción en la legislación doméstica y tendría que comprimir, no anular, el margen de apreciación del que gozan los Estados. Tal y como señala La Barbera (2019: 252), esto fortalecería la adopción de las medidas reparatorias concretas que el Tribunal podría dictar a la hora de intentar paliar los efectos de este problema social[36].

En segundo lugar, el TEDH debería de tratar de abordar conjuntamente, en los casos que así lo requieran, el péndulo *maldistribution–misrecognition*. Aunque la elaboración de este mínimo ayudaría mucho en esta tarea, este no consigue captar completamente las complejas conexiones que se dan entre las esferas de la distribución material y del

---

[34] Sobre la lógica de las obligaciones internacionales y los «elementos esenciales», así como el conjunto de las Observaciones Generales del CESCR, se podría apoyar el TEDH. Igualmente, encuentro algunas aportaciones relevantes en este aspecto: 1) siguiendo a Alkire, Kövesdi, Scheja y Vollmer (2023), los análisis y estudios vinculados a la medición de la pobreza multidimensional, tanto en su versión absoluta como en la flamante versión moderada, cuentan con una importante dosis de realidad de indicadores que alertan sobre situaciones de pobreza indignas; 2) el TEDH podría fijarse en la labor de la Corte IDH a la hora de identificar niveles mínimos esenciales, tal y como muestra Courtois (2020: 20) con respecto al derecho a la salud. Igualmente, la observación de Pelayo Möller (2012: 44 y ss.) sobre la experiencia de la Corte Constitucional Colombiana a la hora de definir los elementos necesarios de un «mínimo vital» para un tratamiento acorde con la enfermedad VIH podría resultar de ayuda. En esta obra el autor también referencia el «mínimo de existencia» elaborado por el Tribunal Constitucional Federal alemán.

[35] Ello daría lugar a algo así como el «colectivo» o, en palabras de Courtois (2010: 114–115) «agrupado» de los pobres, que encontraría su punto de apoyo en las categorías de «origen social», «fortuna» o «cualquier otra situación» del art. 14 CEDH, y supondría una «protección especial» en base a la situación de privación o desventaja sufrida.

[36] Discutir este (o estos posibles) mínimo (o mínimos) es un tema que debería estar presente de manera urgente en la agenda del llamado «diálogo entre tribunales» (Corona Macías, 2022). Este diálogo debería de extenderse a las cortes nacionales con el objetivo de, como destaca García Roca (2019: 34), llevar a cabo la «europeización de las jurisdicciones constitucionales», al estilo del «control de convencionalidad» interamericano.

reconocimiento. En este sentido, la herramienta de la «interseccionalidad» sería de gran ayuda, además de que goza de una considerable salud en el ámbito de los *Legal Studies* (La Barbera, 2017; 2019: 249–252; La Barbera y Wences Simón, 2023) y no resultaría ajena a la dinámica jurisprudencial europea (Barranco Avilés, 2021; Frías, 2022)[37].

Algunos de los principales casos que hemos examinado en materia de pobreza, tales como *M.S.S.*, V. M. y otros y *Hudorovic y otros*, han dejado de lado el análisis de posibles factores discriminatorios que, si se hubiesen examinado, tal vez, podrían haber resultado determinantes o complementarios para una mejor comprensión de las distintas situaciones de pobreza abordadas.

Para finalizar, con base en los posibles riesgos que la doctrina alerta sobre el uso de la noción de «grupo (social) vulnerable» (Fineman, 2008; 2013; Peroni y Timmer, 2013, entre otros), considero que el TEDH debería intentar plantear las situaciones de pobreza más en clave del lenguaje de las capacidades que en el de las necesidades[38], debido a que, como sostiene Anderson (1994: 337), «cuando se proporciona ayuda para satisfacer las necesidades de los asistidos sin tener en cuenta sus capacidades, estas resultan a menudo socavadas o debilitadas por la abrumadora asistencia del donante».

El Tribunal podría encontrar una buena base de apoyo en los informes del PNUD, en el trabajo de la Relatoría Especial sobre la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos y, más cerca de su labor, en la reciente línea jurisprudencial sobre pobreza adoptada en la Corte IDH[39].

5. CONCLUSIONES

Este capítulo ha tenido como principal objetivo mostrar cómo se analizan, abordan y resuelven por parte del TEDH los principales contenciosos en relación con la pobreza. A través del estudio de la doctrina jurisprudencial se han abordado las que he considerado sus principales potencialidades e insuficiencias, tarea a la que se ha sumado la modesta

---

[37] Aunque este criterio está vinculado a la categoría del «género», la Corte IDH ha planteado, recientemente, la posibilidad de su extensión a otros ámbitos más allá de este o en el que no esté presente (véase, Corte IDH (2020). Empleados de la Fábrica de Fuegos en Santo Antônio de Jesus y sus familiares).

[38] Véase Lavrysen (2015), que también ha trabajado en este sentido.

[39] Con respecto a los informes del PNUD, pueden verse todos aquellos vinculados con la pobreza desde los años noventa en adelante. En lo que se refiere a la Relatoría, su máxima expresión se encuentra en los «Principios Rectores sobre la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos», aunque buena parte de los informes temáticos anuales, especialmente desde el mandato de Magdalena Sepúlveda, adoptan este parecer. En último lugar, para la reciente línea jurisprudencial en materia de pobreza en la Corte IDH, remito a Martinón Quintero (2023).

intención de brindar algunas posibles rutas complementarias para su mejora.

Antes de todo ello, se señaló, en el segundo apartado, las distintas nociones contemporáneas de pobreza a través de la lupa del criterio multidimensional. En el tercer apartado, se pusieron encima de la mesa algunas razones para avalar la defensa del enfoque de derechos humanos como paradigma de abordaje y afrontamiento de la pobreza. La dinámica jurisprudencial del Tribunal, se sostuvo, es un tipo de aplicación concreta de este enfoque de derechos humanos, que tiene su razón de ser en la exigibilidad, protección y garantía de estos derechos.

En definitiva, este trabajo no ha tenido otra intención que la de sumarse al análisis de la labor del TEDH en lo que respecta a la pobreza, la cual, en ocasiones, se la ha definido como una «revolución silenciosa» (Timmer, 2013), e intentar arrojar algo de luz sobre dicha tarea. A mi modo de ver, el análisis de casos llevado aquí a cabo infiere que conviene ser prudentes a la hora de catalogar a la misma en tales términos.

Es verdad que las funciones y el alcance del Tribunal están limitados por las decisiones legislativas y políticas, y que deberían de llevarse a cabo cambios importantes en estos ámbitos —tales como la sobrecarga de casos a tratar, la mayor dotación de medios y recursos, ampliación de los derechos convencionales, el temor a que los Estados limiten más su labor, la creación de una sección social en el seno del TEDH o dotar con igual fuerza al CEDS—, pero no es menos cierto que este órgano, en el nivel umbral mínimo aludido, debería de reforzar más su compromiso con los que están «peor situados» (Cortina, 2017), por la simple razón de que la pobreza es un conjunto de situaciones contrarias a la dignidad humana, es decir, al acceso y disfrute de los derechos humanos.

Debido a lo anterior, sus esfuerzos deberían centrarse en especificar un criterio de «mínimo garante» de satisfacción de una serie de garantías centrales como al que se ha hecho referencia, con el objetivo de argumentar en favor de un núcleo multidimensional lo suficientemente amplio como para no defraudar ni resultar inefectivo, dotar de mayor fuerza al «principio de efectividad» en consonancia con el criterio del margen de apreciación y las medidas reparatorias para combatir las exclusiones que generan las situaciones de pobreza (Villoro, 2000) y, por último, ampliar el «principio de conexión» hacia otras garantías socioeconómicas (y abrirse a otras como las culturales, formativas, educativas, ambientales, etcétera).

En un continente como el europeo, que cuenta con unas tasas altas de desarrollo social y económico a nivel mundial, continúa habiendo gente privada de sus capacidades más elementales. En este sentido, la doctrina jurisprudencial, como ya ha demostrado, tiene el potencial

para adaptar, aunque sea en un «nivel mínimamente adecuado», los derechos humanos a la realidad social de la que forma parte. El respeto por la dignidad humana se encuentra en el núcleo de los derechos humanos y, hoy más que nunca, se necesita reivindicar esta igual consideración y respeto por los demás para atajar uno de los mayores desafíos de nuestras democracias: la pobreza.

6. BIBLIOGRAFÍA

Abramovich, V. y Courtis, C. (2014), *Los derechos sociales como derechos exigibles*, Trotta.

Alkire, S., Kövesdi, F., Scheja, E. y Vollmer, F. (2023), «Moderate Multidimensional Poverty Index: Paving the Way Out of Poverty», *Soc Indic Res*, 168: 409–445. Disponible en: *https://doi.org/10.1007/s11205-023-03134-5*.

Anderson, M. B. (1994), «El concepto de vulnerabilidad: más allá de la focalización en los grupos vulnerables», *Revista Internacional de la Cruz Roja*, 19 (124): 336–341.

Al Tamimi, Y. (2016), «The Protection of Vulnerable Groups and Individuals by the European Court of Human Rights», *European Journal of human rights*, 5: 561–583. Disponible en *https://hdl.handle.net/1814/50685.*

Álvarez Vélez, M. I. y Rey Pérez, J. L. (2015), *Derecho y pobreza*, Thomson Reuters Aranzadi.

Barcelona, J. (2017), «El Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la pobreza», *Ius Fugit. Revista interdisciplinar de estudios histórico–jurídicos*, 20: 323–370.

Barranco Avilés, M. C. (2021), «Interseccionalidad y discapacidad en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos», en la Spina, E.; Cruz Ayuso, C. de la y Morondo Taramundi, D. (coords.), *Desigualdades complejas e interseccionalidad. Una revisión crítica,* 165–184, Dykinson.

Bayón, J. C. (2000), «Derechos, democracia y constitución», *Discusiones,* 1: 65–94. Disponible en *https://doi.org/10.52292/j.dsc.2000.2378*.

Bilchitz, D. (2017), *Pobreza y derechos fundamentales. La justificación y efectivización de los derechos socioeconómicos,* Madrid, Marcial Pons.

Bobbio, N. (1991), *El tiempo de los derechos*, Sistema.

Boltvinik, J. (1990), *Pobreza y necesidades básicas. Conceptos y métodos de medición*, Proyecto regional para la superación de la pobreza del PNUD.

Bonet Pérez, J. (2016), «La protección indirecta como instrumento de exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos», *Derechos y Libertades. Revista de Filosofía del Derecho y derechos humanos*, 35: 137–183. Disponible en *http://hdl.handle.net/10016/24922*.

Bouazza Ariño, O. (2021), «La doctrina de los conceptos autónomos en el sistema del Convenio Europeo de Derechos Humanos», *Revista Española de Derecho Administrativo*, 212: 221–238.

Boyle, K. (2018), *Models of Incorporation and Justiciability for Economic, Social and Cultural Rights*, Scottish Human Rights Commission.

— (2020), *Economic and Social Rights Law. Incorporation, justiciability and principles of adjudication*, Routledge.
Casal, P. (2007), «Why Sufficiency Is Not Enough», *Ethics*, 117 (2): 296–326. Disponible en *https://doi.org/10.1086/510692*.
Contreras Peláez, F. J. (1994), *Derechos Sociales: Teoría e Ideología*, Tecnos.
Corona Macías, L. A. (2022), «El diálogo entre tribunales, la nueva vía para la justicia multinivel en derechos humanos», en Magallanes Ramírez, E. y Rivera Camacho, S. M. (coords.) y Hernández Barrón, A. y Chávez Cervantes, J. (dirs.), t. xxii, *Actualidad y Derechos Humanos,* Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco e Instituto de Derechos Humanos Francisco Tenamaxtli, pp. 161–185.
Cortina, A. (2017), *Aporofobia, el rechazo al pobre. Un desafío para la democracia*, Paidós.
Courtis, C. (2010), «Dimensiones conceptuales de la protección legal contra la discriminación», *Revista Derecho del Estado*, 24: 105–142. Disponible en *https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derest/article/view/422*.
— (2020), «Prólogo», en Morales Antoniazzi, M.; Ronconi, L. y Clérico, L. (coords.), *Interamericanización de los DESCA. El caso Cuscul Pivaral de la Corte IDH,* Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional Público, Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro, Instituto de Investigaciones Jurídicas y Universidad Nacional Autónoma de México, pp. 15–23.
Delgado Rojas, J. I. (2020), «Kant y la dignidad humana en la Corte Interamericana de Derechos Humanos», *Derechos y Libertades: Revista de Filosofía del Derecho y derechos humanos*, 43: 241–271. Disponible en *https://doi.org/10.14679/1185*.
De Lucas, J. y Añón Roig, M. J. (1990), «Necesidades, razones, derechos», *Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho*, 7: 55–81. Disponible en *https://doi.org/10.14198/DOXA1990.7.03*.
Dieterlen, P. (2003), *La pobreza: un estudio filosófico*, Universidad Nacional Autónoma de México.
Doyal, L. y Gough, I. (1994), *Teoría de las necesidades humanas*, ICARIA: FUHEM, D.L.
Dworkin, R. (2012), *Los derechos en serio*, Ariel.
Faur, E. (2008), «La pobreza como problema de derechos humanos. Nuevas orientaciones para históricas privaciones», *Revista IIDH*, 47: 165–182. Disponible en *https://www.corteidh.or.cr/tablas/r23827.pdf.*
Fernández Blanco, C. y Pereira Fredes, E. (2021), *Derecho y pobreza*, Marcial Pons.
Fineman, M. A. (2008), «The vulnerable subject: anchoring equality in the human condition», *Yale Journal of Law and Feminism*, 20 (1): 1–23. Disponible en *https://ssrn.com/abstract=1131407*.
— (2013), «Equality, Autonomy, and the Vulnerable Subject in Law and Politics», en Fineman, M. A. y Grear, A. (eds.), *Vulnerability. Reflections on a New Ethical Foundation for Law and Politics,* Routledge, pp. 13–27.
Flegar, V. (2016), «Vulnerability and the principle of non–refoulement in the European Court of Human Rights: towards an increased scope of protection for persons fleeing from extreme poverty?», *Contemporary Readings in Law and Social Justice*, 8 (2): 148–169. Disponible en *https://ssrn.com/abstract=2737302.*

Frías, M. (2022), «La interseccionalidad de la discriminación por razones de raza, etnia y género», proyecto *Convivir sin discriminación: un enfoque basado en los derechos humanos y la perspectiva de género*. Disponible en *https://vivre-ensemble.ma/*

Ganty, S. (2020), «Poverty as Misrecognition: What Role for Anti–discrimination Law in Europe?», *EUI Department of Law Research Paper*, 12: 1–34. Disponible en *https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3715003*.

García Manrique, R. (2020), «La erradicación de la pobreza: una cuestión de derechos civiles», *Lex Social. Revista jurídica de los Derechos Sociales*, 10 (1): 292–304.

García Roca, J. (2019), *La transformación constitucional del Convenio Europeo de Derechos Humanos*, Thomson Reuters Aranzadi.

Garzón Valdés, E. (1989), «Representación y democracia», *Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho*, (6): 143–163. Disponible en *https://doi.org/10.14198/DOXA1989.6.07*.

Grear, A. (2007), «Challenging Corporate "Humanity": Legal Disembodiment, Embodiment and Human Rights», *Human Rights Law Review*, 7 (3): 511–543. Disponible en *https://doi.org/10.1093/hrlr/ngm013*.

Habermas, J. (2010), «El concepto de dignidad humana y la utopía realista de los derechos humanos», *Dianoia: anuario de Filosofía*, 55 (64): 3–25.

Herreros López, J. M. (2023), «La protección de las prestaciones sociales de carácter económico en la jurisprudencia del TEDH a través del artículo 1 del protocolo núm. 1», *CEDH. Revista Española de Derecho Europeo*, 86: 41–72. Disponible en *https://doi.org/10.37417/REDE/num86_2023_1444*.

Imbert, P. H. (1989). «Droit des pauvres, pauvre(s) droit(s)? Réflexions sur les droits économiques, sociaux et culturels», *Revue de Droit Public et de la Science Politique,* 3: 739–754.

Kant, I. (2005), *La Metafísica de las Costumbres*, Tecnos.

La Barbera, M. (2017), «Interseccionalidad», *Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad*, 12: 191–198. Disponible en *https://e-revistas.uc3m.es/index.php/EUNOM/article/view/3651*.

— (2019), «La vulnerabilidad como categoría en construcción en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: límites y potencialidad», *Revista de Derecho Comunitario Europeo*, 62: 235–257. Disponible en *https://doi.org/10.18042/cepc/rdce.62.07*.

La Barbera, M. y Wences Simon, I. (2023). «"Mujeres", "Género" e "Interseccionalidad" en las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: avances, límites y perspectivas», en Montalván–Zambrano, D. e Wences, I. (coords.), *La justicia detrás de la justicia. Ideas y valores políticos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos,* Marcial Pons, pp. 75–99.

Lavrysen, L. (2015), «Strengthening the protection of human rights of persons living in poverty under the ECHR», *Netherlands Quarterly of Human Rights*, 33 (3): 293–325. Disponible en *https://doi.org/10.1177/016934411503300303.*

López Guerra, L. (2015), «Crisis económica y derechos humanos. Una nota de jurisprudencia», *UNED. Teoría y Realidad Constitucional*, 36: 399–414. Disponible en *https://doi.org/10.5944/trc.36.2015.16066*.

— (2018), «La evolución del sistema europeo de protección de derechos humanos», *UNED. Teoría y Realidad Constitucional*, 42: 111–130. Disponible en *https://doi.org/10.5944/trc.42.2018.23649*.

Martinón Quintero, R. (2023), «Pobreza y derecho internacional: la aportación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos» en Montalván–Zambrano, D. e Wences, I. (coords.), *La justicia detrás de la justicia. Ideas y valores políticos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos,* Marcial Pons, pp. 147–175.

Maurino, G. (2007), «Pobreza y Discriminación: la protección constitucional para los más humildes», en Alegre, M. y Gargarella, R., (eds.), *El Derecho a la Igualdad. Aportes para un constitucionalismo igualitario,* LexisNexis, pp. 313–343.

Max–Neef, M., Elizalde, A. y Hopenhayn, M. (2010), *Desarrollo a escala humana. Opciones para el futuro*, Biblioteca CF + S. Disponible en *http://habitat.aq.upm.es*.

Mestre i Mestre, R. M. (2016), «La protección de los derechos sociales por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos», *Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho*, 33: 113–132. Disponible en *https://doi.org/10.7203/CEFD.33.8249*.

Montalván–Zambrano, D. J. (2020), «Justicia ecológica», *Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad*, 18: 179–198. Disponible en *https://doi.org/10.20318/eunomia.2020.5272*.

— (2023), «Redefiniendo lo humano: la protección de la naturaleza en la Corte Interamericana de Derechos Humanos» en Montalván–Zambrano, D. e Wences, I. (coords.), *La justicia detrás de la justicia. Ideas y valores políticos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos,* Marcial Pons, pp. 259–283.

Morte Gómez, C. (2018), «Los derechos económicos y sociales en la jurisprudencia reciente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: una selección», *UNED. Teoría y Realidad Constitucional*, 42: 551–568. Disponible en *https://doi.org/10.5944/trc.42.2018.23646*.

Moyn, S. (2019), *No bastan. Los derechos humanos en un mundo desigual*, Tirant Lo Blanch.

Nino, C. S. (1990), «Autonomía y necesidades básicas», *Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho*, 7: 21–34. Disponible en *https://doi.org/10.14198/DOXA1990.7.01*.

Nussbaum, M. (2005), *Capacidades como titulaciones fundamentales. Sen y la justicia social*, Universidad Externado de Colombia.

— (2007), *Las Fronteras de la Justicia. Consideraciones sobre la exclusión*, Paidós.

— (2012a), *Las mujeres y el desarrollo humano*, Herder.

— (2012b), *Crear Capacidades. Propuesta para el desarrollo humano*, Paidós.

Parra, Ó., Villanueva Hermida, M. Á. y Enrique Martín, Á. (2008), *Protección Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Sistema Universal y Sistema Interamericano*, Instituto Interamericano de Derechos Humanos.

Pelayo Möller, C. M. (2012), «El "mínimo vital" como estándar para la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales», *Revista electrónica métodhos*, 3: 32–51. Disponible en *https://revistametodhos.cdhcm.org.mx/index.php/numero-3*.

Pérez Alberdi, M. R. (2011), «La jurisprudencia social del Tribunal Europeo de Derechos Humanos», *Lex Social. Revista de los Derechos Sociales*, 1: 93–105.

Pérez Goldberg, P. (2021), *Las mujeres privadas de libertad y el enfoque de las capacidades*, Ediciones Der.

Peroni, L. y Timmer, A. (2013), «Vulnerable groups: The promise of an emerging concept in European Human Rights Convention law», *International Journal of Constitutional Law*, 11 (4): 1056–185. Disponible en *https://doi.org/10.1093/icon/mot042*.

Pinto, M. (2008), «Los derechos humanos desde la dimensión de la pobreza», *Revista IIDH*, 48: 43–62.

— (2009), «Integralidad de los derechos humanos. Exigibilidad de los derechos colectivos y acceso a la justicia de las personas en condición de pobreza», *Revista IIDH*, 50: 53–71.

Pribytkova, E. (2019), «Protection from poverty in the European Court of Human Rights», en Gaisbauer, H. P.; Schweiger, G. y Sedmak, C. (eds.), *Absolute Poverty in Europe. Interdisciplinary perspectives on a hidden phenomenon,* Policy Press, pp. 335–396.

Ribotta, S. (2008), «Necesidades y Derechos: un Debate no Zanjado sobre Fundamentación de Derechos (Consideraciones para Personas Reales en un Mundo Real)», *Jurídicas. Revista del Centro de Investigaciones Jurídicas, Políticas y Sociales*, 5 (1): 29–56. Disponible en *https://revistasojs.ucaldas.edu.co/index.php/juridicas/article/view/5650.*

— (2011), «Necesidades, Igualdad y Justicia. Construyendo una propuesta igualitaria de necesidades básicas», *Revista Derechos y Libertades*, II (24): 259–299. *http://hdl.handle.net/10016/16151*.

Rorty, R. (1998), «Human Rights, Rationality, and Sentimentality», *Headline Series*, 318: 116–127.

Salmón G, E. (2007), «El largo camino de la lucha contra la pobreza y su esperanzador encuentro con los derechos humanos», *Sur–Revista Internacional de Derechos Humanos*, 7: 151–177. Disponible en *http://dx.doi.org/10.1590/S1806-64452007000200007.*

Sen, A. (1985), «A Sociological Approach to the Measurement of Poverty: A Reply to Professor Peter Townsend», *Oxford Economic Papers*, 37 (4): 669-676. Disponible en *https://www.jstor.org/stable/2663049.*

— (1997), *Human Rights and Asian Values*, The New Republic.

— (2000), *Desarrollo y Libertad*, Planeta.

— (2010), *La idea de la justicia*, Taurus.

— (2021), *Nuevo examen de la desigualdad*, Alianza Editorial.

Spicker, P. (2013), *Poverty and social security: concepts and principles*, Routledge.

Talavera Fernández, P. (2019), «El buen camino hacia el fin de la pobreza. Del paradigma monetarista al enfoque de derechos humanos», *Scio. Revista de Filosofía*, 17: 131–168. Disponible en: *https://revistas.ucv.es/scio/index.php/scio/article/view/515*.

— (2020), «El fin de la pobreza: ¿una cuestión de planificación económica o de garantía de derechos humanos?» en Talavera, P. (coord.), *Sobre pobreza y derecho,* Tirant lo Blanch, pp. 23–64.

Timmer, A. (2013), «A Quiet Revolution: Vulnerability in the European Court of Human Rights», en Fineman, M. y Grear, A. (eds.), *Vulnerability. Reflections on a New Ethical Foundation for Law and Politics,* Routledge, pp. 147–170.

Townsend, P. (1979), *Poverty in the United Kingdom. A survey of household resources and standards of living*, Peregrine Books.

— (2003), «La conceptualización de la pobreza», en Boltvinik, J. (coord.), *Pobreza: desarrollos conceptuales y metodológicos*, *Comercio Exterior*, 5 3 (5): pp. 445–452.

Truscan, I. (2013), «Considerations of vulnerability: from principle to action in the case law of the European Court of Human Rights», *Retfaerd Årgang* 36, 3 (142): 64–83.

Urueña, R. (2013), «Luchas locales, cortes internacionales. Una exploración de la protección multinivel de los derechos humanos en América Latina», *Revista Derecho del Estado*, 30: 301–328.

Verdiales López, D. M. (2019), «Los derechos humanos en las estrategias de erradicación de la pobreza: Agenda 2030», *Cuadernos de Política Exterior Argentina (Nueva Época)*, 130: 7–19.

Villoro, L. (2000), «Sobre el principio de la injusticia: la exclusión (VIII Conferencias Aranguren, 1999)», *Isegoría*, 22: 103–142. Disponible en *https://doi.org/10.3989/isegoria.2000.i22.524*.

Von Bogdandy, A. y Urueña, R. (2020), «International Transformative Constitutionalism in Latin America», *The American Journal of International Law*, 114 (3): 403–442. Disponible en *https://doi.org/10.1017/ajil.2020.27.*

6.1. Decisiones y sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Airey contra Irlanda, Sentencia de 9 de octubre de 1979, demanda núm. 6289/73.

O'Rourke contra Reino Unido, Decisión de 26 de junio de 2001, demanda núm. 39022/07.

Nitecki contra Polonia, Decisión de 21 de marzo de 2002, demanda no. 65653/01.

Larioshina contra Rusia, Decisión de 23 de abril de 2002, demanda núm. 56869/00.

Moldovan y otros contra Rumania, núm. 2, Sentencia de 12 de julio de 2005, demandas núms. 41138/98 y 6432/01.

Wallová y Walla contra República Checa, Sentencia de 26 de octubre de 2006, demanda núm. 23848/04.

Budina contra Rusia, Decisión de 18 de junio de 2009, demanda núm. 45603/05.

M. S. S. contra Grecia y Bélgica, Sentencia de 21 de enero de 2011 (Gran Sala), demanda núm. 30696/09.

Sufi y Elmi contra Reino Unido, Sentencia de 28 de junio de 2011, demandas núms. 8319/07 y 11449/07.

Popov c. Francia, Sentencia de 19 de enero de 2012, demandas núms. 39472/07 y 39474/07.

Yordanova y otros contra Bulgaria, Sentencia 24 de abril de 2012, demanda núm. 25446/06.

Ilbeyi Kemaloglu y Meriye Kemaloglu contra Turquía, de 10 de julio de 2012, demanda núm. 19986/06.
S. H. H. contra Reino Unido, Sentencia de 29 de enero de 2013, demanda núm. 60367/10.
Mehmet Sentürk y Bekir Sentürk contra Turquía, Sentencia de 9 de abril de 2013, demanda núm. 13423/09.
R. M. S. contra España, Sentencia de 18 de junio de 2013, demanda núm. 28775/12.
Nencheva y otros contra Bulgaria, Sentencia de 18 de septiembre de 2013, demanda núm. 48609/06.
Winterstein y otros contra Francia, Sentencia de 17 de octubre de 2013, demanda núm. 27013/07.
F. H. contra Grecia, Sentencia de 31 de julio de 2014, demanda núm. 78456/11.
Tarakhel contra Suiza, Sentencia de 4 de noviembre de 2014 (Gran Sala), demanda núm. 292127/12.
AL.K. contra Grecia, Sentencia de 11 de marzo de 2015, demanda núm. 63542/11.
A. S. contra Suiza, Sentencia de 30 de junio de 2015, demanda núm. 39350/13.
V. M. y otros contra Bélgica, Sentencia de 7 de julio de 2015, demanda núm. 60125/11.
Amadou contra Grecia, Sentencia de 4 de febrero de 2016, demanda núm. 37991/11.
Garib c. Países Bajos, Sentencia de 06 de noviembre de 2017, demanda núm. 43494/09.
Hirtu y otros contra Francia, Sentencia de 14 de agosto de 2020, demanda núm. 24720/13.
Hudorovic y otros contra Eslovenia, Sentencia de 07 de septiembre de 2020, demanda núms. 24816/14 y 25140/14.
Lacatus contra Suiza, Sentencia de 19 de abril de 2021, demanda núm. 14065/15.
R.R. y otros contra Hungría, Sentencia de 05 de julio de 2021, demanda núm. 36037/17.
Camara contra Bélgica, Sentencia de 18 de julio de 2023, demanda núm. 49255/22.

6.2. Otro material bibliográfico utilizado.

European Anti–Poverty Network (2023), *España, cuarto país de la Unión Europea con más personas en situación de pobreza o exclusión social*, EAPN, Disponible en *https://www.eapn.es/index.php*.
Banco Mundial (2022), *Pobreza: una agenda estancada*, Banco Mundial Birf–Aif. Disponible en *https://www.bancomundial.org/es/home*.
PNUD (2023), *Veinticinco países redujeron a la mitad la pobreza multidimensional en un periodo de quince años, aunque todavía hay 1100 millones de personas en situación de pobreza*, PNUD Colombia. Disponible en *https://www.undp.org/es/colombia*